

Territorio y libertad

#4

Junio 2023

Informes país: Brasil, Ecuador y Guatemala

PARTICIPAN EN ESTE NÚMERO

Mercedes Solá Pérez
Esteban Daza Cevallos
Christiane Campos
Débora Lima
Eraldo da Silva Ramos Filho
Jorge Montenegro
Mônica Cox
Osvaldo Aly
Yamila Goldfard
Stalin Herrera
Alejandra Santillana
Francisco Hidalgo
Carlos Pastor
Mario Sosa

Boletín del
Grupo de Trabajo
**Estudios críticos
del desarrollo rural**



CLACSO



PLATAFORMAS PARA
EL DIÁLOGO SOCIAL

Territorio y libertad. Informes país : Brasil, Ecuador y Guatemala no. 4 / Mercedes Solá Pérez ... [et al.] ; Coordinación general de Alhelí González Cáceres ... [et al.] . - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2024.
Libro digital, PDF - (Boletines de grupos de trabajo)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-813-695-0
1. Movimiento Social. 2. Informes. I. Solá Pérez, Mercedes. II. González Cáceres, Alhelí, coord.
CDD 306.098

PLATAFORMAS PARA EL DIÁLOGO SOCIAL



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Colección Boletines de Grupos de Trabajo

Director de la colección - Pablo Vommaro

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva
María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial
Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial

Equipo

Natalia Gianatelli - Coordinadora
Cecilia Gofman, Marta Paredes, Rodolfo Gómez, Sofía Torres,
Teresa Arteaga y Ulises Rubinschik

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina. Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875
<clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>



Coordinadores

Alhelí González Cáceres
Centro de Estudios Rurales
Interdisciplinarios
Paraguay
caceresalheli06@gmail.com

Pablo Leandro Díaz Estévez
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación
Universidad de la República
Uruguay
diazpablouruguay@gmail.com

Natalia Espinosa Rincón
Facultad de Estudios Ambientales y
Rurales
Departamento de Desarrollo Rural y
Regional
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
n.espinosa@javeriana.edu.co

Coordinación y edición del número

Mercedes Solá Pérez
Programa de Pósgraduação em
Geografia
Universidade Federal de Sergipe
Brasil
mercedessolap@hotmail.com

Esteban Daza Cevallos
Instituto de Estudios Ecuatorianos
Ecuador
dazaesteban@gmail.com



Contenido

5 Presentación

Mercedes Solá Pérez
Esteban Daza Cevallos

12 Informe Brasil

Christiane Campos
Débora Lima
Eraldo da Silva Ramos Filho
Jorge Montenegro
Mercedes Solá Pérez
Mônica Cox
Osvaldo Aly
Yamila Goldfarb

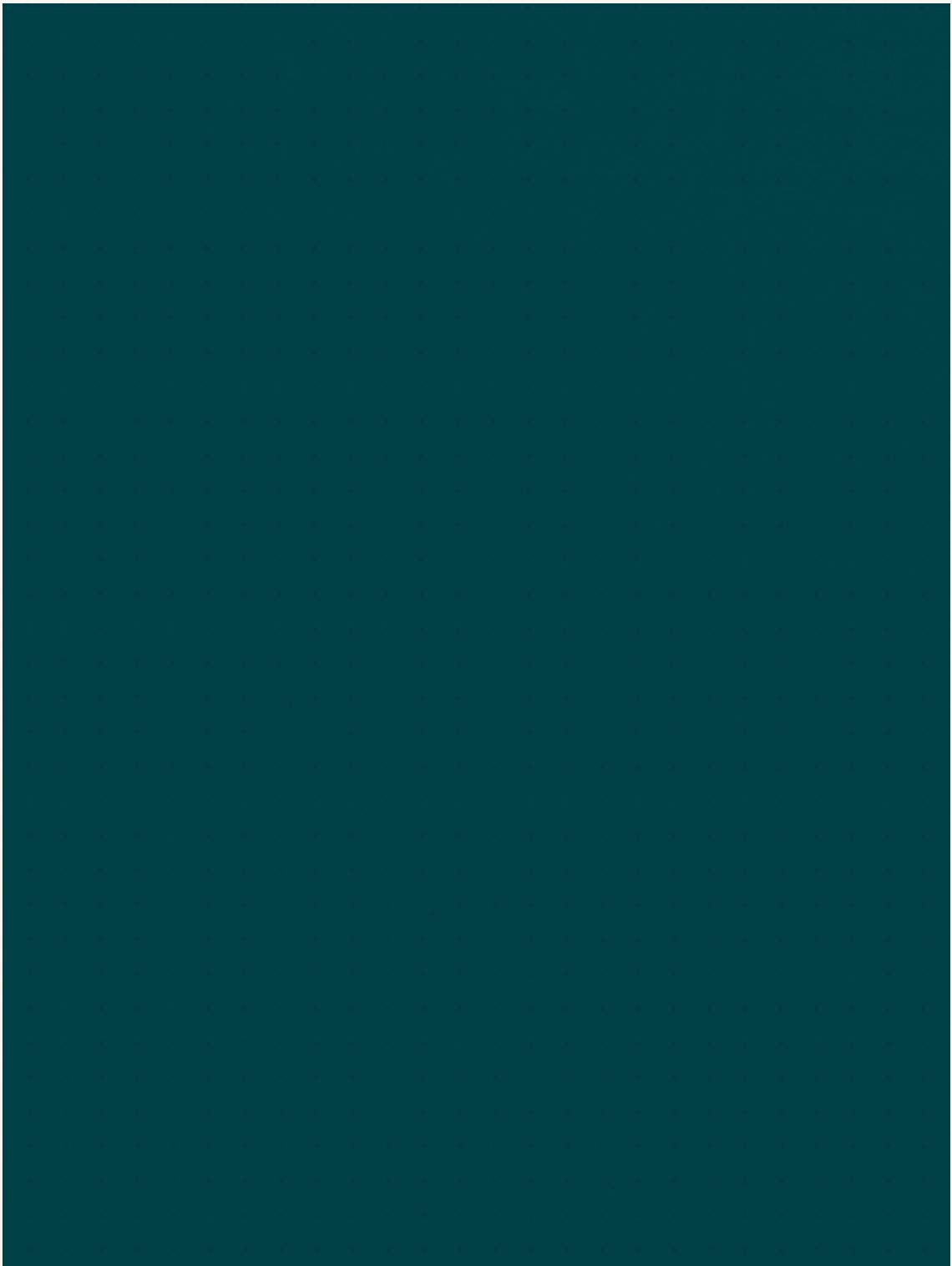
27 Informe Ecuador

Stalin Herrera
Alejandra Santillana Ortiz
Esteban Daza Cevallos
Francisco Hidalgo
Carlos Pastor

45 Informe Guatemala

Mario Sosa







Presentación

Mercedes Solá Pérez*

Esteban Daza Cevallos**

El Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos del desarrollo rural (GT) presenta su boletín de “Análisis de Coyuntura País”, donde se reflexiona acerca de las condiciones que enfrentan las sociedades rurales y campesinas Latinoamericanas y del Caribe. En esta ocasión publicamos los tres primeros análisis de las realidades de Brasil, Ecuador y Guatemala. Los informes país son un ejercicio de debate de larga data de nuestro GT que nos permite tener una visión crítica sobre el desarrollo rural, pero también nos acerca a las alternativas que proponen las actorías sociales frente al avance del capitalismo en el campo.

Los informes país eran presentados de manera regular y presencial en los encuentros del GT, sin embargo, con la llegada de la pandemia de COVID19 se perdió esta regularidad. Ahora, las condiciones nos permiten retomar el ritmo de estos análisis de coyuntura y situarlos tanto en la presencialidad como en la dinámica virtual. En este año 2023 nos hemos propuesto que estos análisis de coyuntura formen parte de nuestros *encuentros políticos formativos* que tendrán una periodicidad trimestral y que alternarán con debates sobre temáticas específicas definidas por

* Profesora de Geografía en el pregrado y maestría de la Universidade Federal do Rio Grande – FURG/Brasil. Doctora en Geografía por la Universidade Federal de Pernambuco con postdoctorado en el postgrado en geografía en la Universidade Federal de Sergipe y en el ámbito del Programa de Educación Ambiental con Comunidades Costeras. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos al desarrollo rural.

** Sociólogo, Master en Filosofía y Pensamiento Social. Coordinador del Observatorio del Cambio Rural. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos al desarrollo rural.

los ejes de trabajo del GT. El programa actual se ha planteado impulsar 4 ejes:

1. Estudiar los impactos y contradicciones en el mundo rural y agrario que está produciendo la expansión capitalista y el ascenso y afianzamiento ultra-neoliberal en América Latina y el Caribe.
2. Analizar los procesos de constitución de los sujetos sociales (campesinos, pueblos originarios, mujeres) en el campo, los impactos que sufren por las actuales dinámicas de destrucción de sus procesos sociales y sus luchas de resistencia y proyectos alternativos.
3. Acompañar los procesos sociales y actores del mundo rural latinoamericano que luchan contra los cambios políticos y económicos producidos por los Estados y el capital que transforman y afectan sus territorios.
4. Estimular el debate interno sobre las relaciones de género, generaciones y feminismos en América Latina y el Caribe¹.

Durante el primer trimestre del 2023 se desarrolló el primer Encuentro Político Formativo de GT, este se realizó en el 31 del mes de marzo. Por cerca de dos horas, Yamila Goldfarb de Brasil, Stalin Herrera de Ecuador y Mario Sosa de Guatemala, presentaron el panorama social, político y económico actual que afectan las dinámicas agrarias de sus países.

En el caso de Brasil la vuelta del PT muestra, por un lado, como el gobierno de Bolsonaro incurrió en acciones que generaron retrocesos en la agenda de derechos, en el ataque a la naturaleza, el desmantelamiento del Estado, la desregulación neoliberal y el abandono de las políticas sociales. Y, por otro lado, vuelven determinadas políticas sociales, por ejemplo, aquella que lucha contra el hambre, pero a su vez, surgen una

¹ Para conocer el plan de trabajo completo visite: <https://www.clacso.org/grupos-de-trabajo/grupos-de-trabajo-2023-2025/?pag=detalle&refe=5&ficha=2436>.

serie de contradicciones entre la agenda institucional y los movimientos sociales que en muchos de los casos termina en absorción.

El gobierno actual del PT se ha propuesto retomar a nivel internacional la agenda ambiental y el apoyo a los BRICS, mientras al interior de Brasil enfrenta un escenario complejo de violencia y de crimen organizado en la Amazonía, pero también de “mercado caliente” o de altos precios y financiarización de la agricultura.

Por su parte la academia brasileña promueve retomar el debate de la reconcentración de la tierra y la reforma agraria con atención a favor de las organizaciones sociales, las mismas que durante el gobierno de Bolsonaro, mantuvieron sus resistencias comunitarias y desde la sociedad civil, algo que permitió que se mantengan ciertos niveles de autonomía.

En Ecuador, el movimiento indígena y campesino se ha consolidado desde el año 2019 como el actor político más importante frente a la agenda neoliberal de pobreza y desigualdad. Este actor ha colocado demandas como la defensa de los derechos de la naturaleza, el Estado Plurinacional e Intercultural. Aunque se puede advertir que la propuesta del movimiento indígena reivindica el rol de la agricultura familiar, no ha consolidado una agenda agraria nacional. Muchas veces, esta agenda está ausente de sus discursos y propuestas.

Uno de los hechos relevantes que ha cambiado el panorama político, social, económico y de seguridad en Ecuador ha sido la explosión de la violencia ligada al narcotráfico y la minería, violencia que ha permeado la institucionalidad pública estableciendo la corrupción como mecanismo de reproducción de estas economías ilegales. Por su parte, las élites económicas agroindustriales y agroexportadoras se benefician de las prebendas que les otorga el gobierno neoliberal de Lasso (2021- noviembre de 2023).

Actualmente, desde el plano de la política, el presidente Lasso que enfrentaba un juicio político ha aplicado la “muerte cruzada”, mecanismo

constitucional para cerrar el Parlamento Nacional y gobernar por cerca de 6 meses vía decreto y llamar a elecciones anticipadas. Esta coyuntura modifica la dinámica social que vuelca los esfuerzos hacia las elecciones. Frente a este panorama hay un ambiente de incertidumbre sobre la agenda agraria, que, por el lado del gobierno actual, ha sido reducida a políticas de libre comercio y desregulación y, por otro lado, queda a expensas del próximo gobierno que, de ser de tendencia progresista, tampoco garantiza un enfoque de soberanía alimentaria.

Mientras, en Guatemala hay un continuum del neoliberalismo y no se avizoran posibilidades de una propuesta progresista que alterne en el gobierno. Guatemala en la división internacional del trabajo ocupa el lugar de un país productor de materias primas y energía barata, razón por la cual se vienen ampliando los monocultivos y el extractivismo, la explotación laboral y los altos índices de pobreza, desempleo y desnutrición.

Un punto importante es la relación entre la concentración de la tierra y el despojo que, por un lado, aumentan los flujos migratorios, volviéndose masivos y, por otro lado, coadyuva con el crecimiento de las actividades ilegales que se articulan de manera orgánica con la banca privada, lo que se denomina como la alianza capitalista entre economías formales y el crimen organizado-narcotráfico.

El ritmo del proceso de acumulación estaría incidiendo de manera directa en las luchas de los sujetos colectivos, que enfrentan retrocesos en derechos, políticas públicas neoliberales, estancamiento de reformas normativas pro-campesinas. Este escenario se presta para la emergencia de sujetos colectivos como los pueblos indígenas y campesinos, mujeres y jóvenes que tienen capacidad de transformación. Sin embargo, son sujetos colectivos que muchas de sus reivindicaciones pueden ser sectoriales y/o locales, condición que no les permite disputar agendas nacionales y menos participar en dinámicas electorales.

En términos generales, la situación de los tres países muestra, además de sus condiciones particulares, una serie de elementos comunes que atraviesan sus realidades y que permiten hacer una lectura regional articulada con las dinámicas mundiales que inciden en la situación de las experiencias agrarias Latinoamericanas y Caribeñas. Entre las propuestas comunes que devinieron del primer análisis de coyuntura encontramos temáticas para el debate interno del GT como:

- Ubicar con precisión las disputas de las autonomías.
- Resituar las olas progresistas.
- Analizar las políticas públicas que no retratan a los sujetos del campo.
- Volver a una discusión profunda sobre las Reformas Agrarias.
- Analizar escalas y relaciones regionales y mundiales.
- Debatir sobre la geopolítica y las múltiples crisis.
- Comprender cómo afectan las dinámicas del crimen organizado.
- Repensar los sujetos colectivos y sus transformaciones.
- Estudiar la agenda y el proyecto campesino, indígena, afro y de los pueblos.

En el próximo boletín referido al “Análisis de Coyuntura País”, tendremos al menos 3 nuevas experiencias Latinoamericanas y del Caribe que nos permitirán continuar graficando la realidad de nuestro continente. El GT está representado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Puerto Rico y Uruguay.

Al cerrar esta introducción queremos mencionar que tanto las dinámicas políticas y sociales de Ecuador, como las de Guatemala han ido

cambiando de manera acelerada, sin embargo, por la temporalidad de los informes país que aquí se presentan estas dinámicas no están presentes en los documentos, sin embargo, queremos dejar en esta introducción un corto alcance de lo que ha sucedido en cada uno de estos dos países.

En Ecuador el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso disolvió el parlamento nacional y llamó a elecciones presidenciales y de parlamento de manera anticipada, esto sirvió para evitar su destitución vía juicio político que llevaba en su contra la Asamblea Nacional. La primera vuelta electoral se llevó a cabo el 20 de agosto en el cual, pasaron al balotaje Luis Gonzales candidata del progresismo y Daniel Noboa, joven candidato de la derecha. La primera vuelta electoral estuvo marcada por la violencia y el crimen organizado que terminó con la vida de Fernando Villavicencio candidato presidencial que si bien, no tenía posibilidad de ganar dio cambio las intenciones de voto beneficiando a la derecha nacional. La segunda vuelta electoral será el 15 de octubre de 2023, mientras tanto Guillermo Lasso sigue gobernando vía decretos presidenciales profundizando su modelo neoliberal.

No queremos dejar de mencionar que, a pesar de este panorama poco alentador para las fuerzas sociales y las clases populares, el mismo 20 de agosto los ecuatorianos decidieron en consulta popular dejar parte del petróleo bajo tierra, más del 50% de los votos válidos se pronunciaron a favor de la iniciativa Yasuní ITT. Otra consulta popular de carácter local el mismo día (20 de agosto) también decidió decirle NO a la extracción minera en sus territorios. Ambos logros representan una inclinación hacia las causas ambientales en Ecuador ante un voraz extractivismo que ha devastado históricamente sus territorios, sobre todo indígenas.

En el caso de Guatemala, la coyuntura varió en tanto el partido político Movimiento Semilla y su candidato Bernardo Arévalo quién se insertaron al balotaje y ganaron finalmente la presidencia. En tanto el Movimiento Semilla es opositor al denominado Pacto de Corruptos, este ha venido

impulsando una estrategia de judicialización para impedir, primero, que dicho partido pudiera continuar compitiendo en la segunda vuelta electoral y, posteriormente, para dificultar o impedir la toma de posesión que deberá ocurrir el 14 de enero de 2024. Así las cosas, la disputa política sigue abierta y el curso del proceso es incierto.



Informe Brasil

Christiane Campos*

Débora Lima**

Eraldo da Silva Ramos Filho***

Jorge Montenegro****

Mercedes Solá Pérez*****

Mônica Cox*****

Osvaldo Aly*****

Yamila Goldfarb*****

- * Economista e jornalista, doutora em geografia pela UFRGS, professora do departamento de Economia e dos programas de Pós-Graduação em Geografia e Economia da Universidade Federal de Sergipe - UFS e participa do Grupo de Trabalho CLACSO Estudos críticos ao desenvolvimento rural.
- ** Geógrafa, com mestrado e doutorado pela UNICAMP. Atualmente é Pós doutoranda do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atua como consultora de comunidades tradicionais e movimentos sociais desde 2012. Membro do Grupo de Trabalho CLACSO Estudos Críticos ao desenvolvimento rural.
- *** Profesor de los cursos de pregrado y posgrado em Geografía de la Universidad Federal de Sergipe. Investigador del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos del desarrollo rural. Coordinador del Programa de Educación Ambiental con Comunidades Costeras de Sergipe y Bahia.
- **** Professor na Graduação e Pós-graduação em Geografia da UFPR. Integrante do Coletivo sobre Conflitos pelo Território e pela Terra - ENCONTTRA, do Coletivo Planejamento Territorial e Assessoria Popular - PLANTEAR e do Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos del desarrollo rural.
- ***** Professora de Geografia na graduação e mestrado da Universidade Federal do Rio Grande FURG. Doutora em Geografia por la Universidade Federal de Pernambuco com pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia na Universidade Federal de Sergipe e no âmbito do Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos del desarrollo rural. .
- ***** Docente da Faculdade de Geografia da UFPE, docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Coordena o Neppag - Nucleo de Educação, Pesquisa e Práticas em Agroecologia e Geografia, Doutora pelo CPDA/UFRJ, Pós-Doutora UBA/IIGG. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos del desarrollo rural.
- ***** Engenheiro Agrônomo com Mestrado em Ciência Ambiental e Doutorado em Gestão de Águas Subterrâneas realizados na USP - Universidade de São Paulo. Vinculado à Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA) e ao GovAmb/IEE/USP. Membro do Grupo de Trabalho CLACSO Estudos críticos ao desenvolvimento rural.
- ***** Doutora em Geografia pela USP - Universidade de São Paulo, pós-doutoranda no Programa de Desarrollo Territorial de América Latina y Caribe -TerritoriAL, da UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e presidente da ABRA - Associação Brasileira de Reforma Agrária. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos del desarrollo rural.

O contexto latino-americano e a ascensão da extrema direita no Brasil: pandemia, fome, violências e lutas sociais¹

A conjuntura brasileira relacionada ao meio rural no presente momento deve se remeter, particularmente, ao golpe que depôs à presidente Dilma Rousseff no ano de 2016. Essa ofensiva da extrema direita no Brasil e contra os governos progressistas se insere num quadro mais amplo do continente latino-americano, e se relaciona com uma série de iniciativas da ultradireita liberal internacional que busca romper todas as fronteiras para a acumulação do capital por meio da intensificação da exploração do ser humano e da natureza.

A primeira ofensiva dos grupos ultraconservadores foi o golpe de Estado no Paraguai em junho de 2012 contra o governo de Fernando Lugo (2008-2012). Em 2015 veio a derrota eleitoral do kirchnerismo na Argentina com a eleição de Mauricio Macri (2015-2019) que antecedeu o golpe de Estado de 2016 no Brasil. Logo após, ocorreu a traição eleitoral no Equador, onde o sucessor eleito criminalizou o ex-presidente Rafael Correa (2007-2017), e por último, o golpe contra o presidente Evo Morales (2006-2019) na Bolívia, em novembro de 2019.

A contraface desses retrocessos se deu pelos processos de resistência em cada um desses países que, por sua vez, guardam distintas peculiaridades. A grosso modo, pode-se dividir em: resistências comunitárias dos povos originários, no caso dos países andinos, o que pôde ser visto na Bolívia, Equador e recentemente no Peru e; resistência exercida pela sociedade civil organizada. Os casos argentino e brasileiro são exemplos de diferentes estratégias de resistência construídas no seio da sociedade civil organizada, somadas ao desgaste dos governos e de suas políticas ultraliberais desumanas e desumanizantes.

¹ El presente artículo fue enviado en el mês de junio de 2023 y aprobado agosto 202.

Na Bolívia, a organização comunitária produziu uma grave derrota aos golpistas. No entanto, não teve força suficiente para trazer de volta o presidente Evo Morales. O caso boliviano é muito rico porque ressignifica e atualiza o que é a herança, influência e a forma de organização comunitária de origem pré-hispânica. O tema da autonomia organizativa, que de certa forma marcou a capacidade de insubordinação e insurreição aos golpes, gerou uma forte reflexão e debate nos movimentos sociais latino-americanos. Em cada um de nossos países da região esses processos sofreram e sofrem influência cultural, social e política do processo de colonização, esse é o caso dos povos originários andinos, e da resistência vista ao golpe na Bolívia.

No caso argentino, a força da sociedade civil organizada, a do movimento sindical que tem se atentado para as mudanças no mundo do trabalho, a emergência dos povos originários, dos movimentos socioambientais e do campesinato e a influência cultural anarquista, têm sido responsáveis pela construção de espaços de resistência e autonomia.

Por sua vez, no Brasil, é importante destacar que dois grandes agrupamentos de diferentes organizações de movimentos populares protagonizam a resistência ao golpe de 2016: a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular que uniram importantes movimentos sociais, sindicatos e partidos, formando uma grande coalizão popular. O movimento indígena brasileiro tem sido outro segmento de notável resistência histórica e tem vivido um importante processo de construção de unidade dos povos, que se materializa todos os anos no Acampamento Terra Livre, em Brasília, desde 2004.

Também destacam-se a Marcha Indígena das Mulheres e a Marcha das Margaridas que têm sido chave com sua pauta em torno de direitos, soberania alimentar, agroecologia e o basta à violência contra as mulheres. Nota-se que a resistência foi muito mais forte no campo dos movimentos sociais e sindicais do que nos partidos, visto que a institucionalização da

esquerda, principalmente do Partido dos Trabalhadores, muitas vezes resultou em posições dúbias com relação à mobilização nas ruas.

Para agravar a situação, em abril de 2018 ocorreu a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No mês de agosto, seus direitos políticos foram cassados, o que abriu caminho para eleição com verniz de democracia do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (2019-2022). A confirmação pública desta perseguição e a busca de criminalização do Presidente Lula (e, com isso, de toda esquerda brasileira) se deu no mês de novembro do mesmo ano, quando o então juiz Sérgio Moro, responsável pela sua condenação, aceitou convite de Bolsonaro para assumir o cargo de Ministro da Justiça do Brasil.

Ao mesmo tempo, o fato de o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) ter sido acompanhado por um enorme ataque legislativo aos direitos das populações do campo, das águas e da floresta, contribuiu para a dificuldade de mobilização e resistência popular. “Todo dia uma nova bomba” caía sobre essas populações. Para se ter uma ideia, segundo o estudo *When crime becomes law: Legislative attacks on rural people's rights and on nature in Brazil* (Mitidiero, Moizés e Martins, 2022) somente entre 2015 e 2021, 233 projetos de lei entraram em tramitação no Congresso Nacional e atacavam diretamente os direitos dos povos indígenas, populações tradicionais, camponeses ou da própria natureza.

Isso significa que as organizações populares, além de ter que se mobilizar pela retomada dos recursos (já que o desmonte das políticas de segurança alimentar e nutricional e para o campo, bem como dos órgãos de gestão e fiscalização como FUNAI, ICMBio e IBAMA, foi feito, entre outras coisas, por meio do corte orçamentário), tinham que se organizar junto aos deputados e senadores aliados, para frear a aprovação de projetos de lei que os violentavam. Esses Projetos de Lei contemplavam liberações de projetos de mineração em terras indígenas, passando por flexibilização de licenciamento ambiental à regularização de terras da União em nome de fazendeiros que as grilaram.

Em 2019 verificaram-se maiores desafios à realização das lutas de resistência em razão de uma conjunção de fatores dentre os quais: a celeridade do desmonte do Estado que comentamos acima, a perseguição e tentativa de criminalização por parte do governo Bolsonaro de todas as formas de resistências sociais e, a truculência e violência armada praticada pelos proprietários privados, especialmente no campo.

Nos anos seguintes, entre 2020 até as eleições de 2022, evidenciou-se uma conjuntura de arrefecimento nas mobilizações sociais em função da propagação da Covid-19 e da letalidade dos efeitos do negacionismo do governo Bolsonaro frente à pandemia. Em que pese o serviço público ter adotado o trabalho remoto e ramos do setor terciário terem tido suas atividades suspensas por meses, registra-se que o processo de produção na indústria e no agronegócio, bem como os segmentos do ramo de logística e transportes não paralisaram ou ajustaram suas atividades para a modalidade remota. Ademais, milhões de trabalhadores e trabalhadoras ocupados na informalidade se arriscaram ao contágio iminente, em busca de obter renda para sobrevivência em meio a uma conjuntura de economia pandêmica.

Nessa etapa, observa-se uma crescente violência no campo. A Comissão Pastoral da Terra na sua publicação Caderno de Conflitos denunciou o crescimento da prática de assassinatos contra lideranças de movimentos sociais e ambientais no meio rural. Em 2021 foram registradas 35 ocorrências, um aumento de 75% em relação ao ano de 2020, quando foram registrados 20 assassinatos. Dentre as vítimas em 2021, 10 eram indígenas, 09 camponeses sem-terra, 06 camponeses posseiros, 03 quilombolas, 02 camponeses assentados, 02 pequenos proprietários, 02 quebradeiras de coco babaçu e 01 aliado/a (Roos et al., 2022).

Nota-se, em comparação com anos anteriores, que houve um avanço da violência sobre os assentamentos de reforma agrária, os territórios consolidados de povos e comunidades tradicionais e de povos indígenas dentre as quais destacamos aquelas perpetradas contra as Terras Indígenas

Awá, Arariboia e Uru-Eu-Wau-Wau, Karipuna, Yanomami², e na luta dos Guaranis Kaiowá no Mato Grosso do Sul em terras de agronegócio, com grandes retomadas e em territórios quilombolas.

Para enfrentar esse quadro de crescente violência e sistemática impunidade perpetrada pelo governo Bolsonaro, as organizações sociais ampliaram a pressão política para que se decretasse o “Despejo Zero” tanto no campo como na cidade, o que foi exigido e conseguido - parcialmente - pelos movimentos sociais, bem como criada a Campanha³ Contra a Violência no Campo.

Vale também mencionar outros efeitos da política ultraliberal adotada no período de pandemia: a elevação do desemprego; a grande taxa de mortalidade da população vitimada pela Covid-19; o favorecimento da produção de *commodities* para exportação; o desmantelamento das políticas voltadas à agricultura camponesa e à reforma agrária (em curso desde 2016), com destaque para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a redução dos investimentos em estruturas de armazenamento de alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), resultando em níveis insignificantes de estoques públicos de alimentos, deixando o país em uma situação vulnerável na conjuntura atual.

Se em 2015, o Brasil saía do mapa da fome da ONU, em 2020, do total de 211,7 milhões de habitantes, 116,8 milhões conviviam com algum grau de insegurança alimentar. Destes, 43,4 milhões não tinham alimentos suficientes, e 19 milhões de habitantes enfrentavam a fome. Esses dados pioraram em 2022, quando mais da metade da população brasileira passou a viver com algum grau de insegurança alimentar (125,2 milhões de pessoas), sendo que 33,1 milhões de fato enfrentavam a fome (Rede PENSSAN, 2022).

² <https://cimi.org.br/2019/01/pelo-menos-seis-terras-indigenas-sofrem-com-invasoes-e-ameacas-no-inicio-de-2019/>

³ <https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/acoes-dos-movimentos/6126-campanha-contra-violencia-nocampo-e-lancada-com-adesao-de-mais-de-50-entidades>

Essa piora no quadro da segurança alimentar no Brasil -quanto mais da soberania - não foi fruto unicamente da pandemia. Ela tem início com o golpe da presidente Dilma Rousseff e o imediato desmonte das políticas públicas de abastecimento, das políticas de produção de alimentos para o mercado interno, da criação da lei do teto de gastos públicos (Emenda Constitucional Nº 95 que tramitou como Proposta de Emenda Constitucional - PEC 241 e PEC 55, na Câmara de Deputados e no Senado, respectivamente), bem como dos espaços de participação social. Processo esse aprofundado com o governo de Jair Messias Bolsonaro⁴.

Apesar de todos os ataques já mencionados acima, os movimentos sociais do campo e da cidade se mobilizaram para enfrentar também esta problemática do flagelo da fome que voltou a assolar o país. Em vários cantos do país foi possível testemunhar a doação de cestas de alimentos produzidos pela agricultura familiar, por pessoas assentadas da reforma agrária, quilombolas e indígenas sendo entregues nas periferias para ajudar a combater a fome do povo abandonado pelas autoridades públicas. Em 2020 as doações chegaram a R\$50 milhões e em 2021, a R\$96 milhões (Ross et al., 2022).

Neste bojo, destacamos algumas iniciativas:

- i) o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) do Rio de Janeiro criou medidas para garantir a continuidade do suprimento antes mesmo que os governos federal, municipal e estadual opinassem sobre o assunto. Para tanto, elaboraram regras específicas para a entrega das cestas de alimentos aos consumidores urbanos, o que envolveu, dentre outras, a entrega diretamente nas casas e pagamento via transferência bancária;
- ii) Por outro lado, os movimentos sociais do Campo Popular, incluindo o próprio MPA, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Levante Popular da Juventude (LEVANTE) e

⁴ Sauer, Leite & Tubino (2020). Agenda política da terra no governo Bolsonaro

o Movimento das Pessoas Afetadas pelas Barragens (MAB) organizaram uma campanha de solidariedade para levar itens básicos de alimentação e higiene para os moradores das favelas em diversos municípios do país numa parceria com a Coalizão Negra por Direitos;

- iii) o MST doou milhares de toneladas de alimentos orgânicos na pandemia⁵. Entre abril de 2020 e abril de 2022, só no Estado do Paraná, foram doadas 130.000 marmitas agroecológicas, 600 máscaras de tecido, 60 litros de álcool 70%, além de 80 tipos de alimentos entre grãos, tubérculos, frutas, legumes, verduras, mel, ovos, pães, bolachas, leite, bebida láctea, queijo e macarrão caseiro. Houve extraordinária espacialização de ações que, por ora, resultou na dádiva de quase 1.000 toneladas de alimentos produzidos no chão da reforma agrária. Em Pernambuco, o MST iniciou na pandemia a ação da marmita solidária - doação de 1 milhão 620 marmitas (seguem com as marmitas em ritmo menos intenso atualmente). Depois seguiu-se com a ação de redes de cozinhas comunitárias solidárias nas periferias da cidade de Recife. Essas iniciativas foram fundamentais num contexto de agravamento da fome e da miséria no país.

A reconstrução do Estado, das políticas públicas e os desafios para as organizações sociais do campo, das águas e das florestas

Em 2023 o Partido dos Trabalhadores (PT) volta ao poder com a terceira eleição de Luís Inácio Lula da Silva. Sobre esse panorama nascente, cabe identificar os novos ministérios e as pessoas/organizações envolvidas neles no sentido de compreender a relação de institucionalização de

5 https://boletimluanova.org/a-origem-da-pandemia-esta-no-que-se-come/#_ednref4

alguns movimentos. O atual governo de Lula abriu novos ministérios que dizem respeito aos direitos dos povos e da natureza, sendo estes:

- Ministério de Igualdade Racial (Anielle Franco);
- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (antigo MDA extinto em 2016 e recriado em 2023 com o acréscimo do termo Agricultura Familiar - Luiz Paulo Teixeira Ferreira);
- Ministério dos Direitos e da Cidadania (Silvio Almeida);
- Ministério dos Povos Indígenas (Sônia Guajajara [Associação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB]);
- Ministério da Pesca e Aquicultura (renovado o ministério que tinha sido fechado, a Secretaria de Pesca Artesanal é presidida por Cristiano Ramalho e formada por membros do Conselho Pastoral dos Pescadores - CPP - e do Movimento de Pescadores e Pescadoras - MPP);
- Ministério das Mulheres (tinha sido transformado em Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Cida Gonçalves [Central de Movimentos Populares- CMP-Brasil]);
- Meio Ambiente e Mudanças climáticas (com incorporação de mudanças climáticas - Marina Silva).

Há também novas secretarias como:

- Secretaria das periferias no Ministério das Cidades (Guilherme Simões [Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - MTST]);
- Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas pertencente à Secretaria-Geral da Presidência da República (Kelli Cristine de Oliveira Mafort [MST]).

Nota-se que, se por um lado há uma distribuição de cargos às organizações historicamente apoiadoras do presidente Lula, há também importante aumento da representatividade e diversidade nesses cargos. Vale também a pena deixar uma reflexão sobre a institucionalização das organizações e a necessidade de atentar para evitar o esvaziamento nas ruas ou das pautas.

Também é marcante a retomada das relações internacionais que relocaliza o país como protagonista de diferentes agendas multilaterais, como a climática. O foco no sul global identifica-se com o reingresso do Brasil na União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) e na Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) - blocos regionais dos quais o governo Bolsonaro havia retirado a participação em 2019 e 2020 respectivamente. Outro indicador importante da relevância do Brasil nessa articulação é o fato de o Banco dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) passar a ser presidido justamente por Dilma Rousseff e além de estar se consolidando o processo de desdolarização nesse âmbito.

Um fator a ressaltar nestes primeiros meses de governo é a ação desenvolvida pelo Ministério do Trabalho em relação à fiscalização por denúncias de trabalho escravo no campo. Casos recentes foram descobertos na colheita de arroz, de cana de açúcar e de uva. De janeiro a março deste ano, 837 pessoas foram resgatadas⁶.

Nestes primeiros 100 dias do novo governo, verificam-se movimentações e sinalizações de compromissos assumidos na campanha eleitoral. A principal pauta social do governo tem sido o combate à fome no país (a mesma do primeiro governo Lula iniciado em 2003). Dentre as medidas adotadas, ainda antes da posse no mandato, Lula conseguiu negociar com o Congresso Nacional um Projeto de Emenda Constitucional que

6 <https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2023/03/26/trabalho-escravo-no-campo-o-que-dizem-trabalhadores-fiscais-e-pesquisadores-sobre-o-recorde-de-resgates.ghml>

libera espaço no orçamento da União para conceder aumento do salário mínimo (de R\$ 1.212 para R\$ 1.320) e ampliação das despesas com políticas compensatórias de transferência de renda e outras políticas sociais, dentre as quais ressaltamos a retomada dos mercados institucionais de alimentos a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e Programa de Alimentação Escolar - PNAE, que fornece 40 milhões de refeições diárias.

Neste âmbito, verifica-se o reajuste dos valores repassados pela União aos Estados e Municípios para custear a alimentação nas escolas públicas do país através do PNAE. Esta é uma medida de grande importância no combate à fome e à insegurança alimentar, uma que para milhões de estudantes das escolas públicas é único espaço que lhes possibilita uma refeição por dia nutricionalmente equilibrada. Vale registrar que a legislação preconiza que os governos devem adquirir ao menos 30% dos produtos da merenda escolar do setor familiar da agricultura.

O PAA também esteve em evidência neste mês de abril de 2023 ao viabilizar a aquisição inédita de produtos dos pescadores e pescadoras artesanais para ser oferecido nos restaurantes universitários das Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). O discurso do governo Lula em relação a este expediente, sinaliza uma intenção de efetivar uma política na qual as universidades públicas brasileiras sejam capazes de comprar alimentos da pesca artesanal e da agricultura camponesa para abastecer os restaurantes universitários. Isto inaugura a expectativa de abertura da política de mercados institucionais para o setor da pesca artesanal, até então não contemplado. Veremos se a experiência não ficará restrita à capacidade de articulação local do atual Secretário da Pesca Artesanal, dada a sua trajetória de assessoria às organizações sociais do segmento e carreira profissional nestas universidades.

Em relação aos territórios legais dos povos, temos o seguinte panorama: Houve somente três homologações de Terras Indígenas após o golpe, no

governo de Michel Temer (2016-2018); Territórios Quilombolas foram 14, sendo quatro comunidades tituladas durante o governo de Bolsonaro. Houve pouquíssimos registros de novos assentamentos de reforma agrária. Apenas uns poucos cujo processo já estava tramitando.

Importante ressaltar os enormes desafios que a região amazônica enfrentará, dado a militarização e desmonte dos órgãos fiscalizadores. A região está sendo controlada pelo crime organizado (tráfico de drogas, tráfico de animais e pesca, extração de madeira, e mineração ilegais). Reverter esse quadro não será tarefa simples. A gravidade disso se fez notar com o aumento das queimadas nos últimos anos, aumento de assassinatos de lideranças e defensores de direitos humanos e com o chocante genocídio da população Yanomami.

Houve ainda forte ataque à Função Social da Terra (princípio presente na Constituição Federal de 1988 e que rege diversas normas legais) por meio de inúmeros projetos de lei que facilitaram o uso especulativo da terra e a apropriação privada de terras públicas, inclusive por estrangeiros.

Diante desse quadro, será preciso, primeiro retomar o papel da Reforma Agrária e acabar com programas de contra-reforma como o “Titula Brasil” que privatiza massivamente as áreas de reforma agrária permitindo que sejam apropriadas pelo agronegócio.

Há a necessidade urgente de voltar a se falar na desconcentração de terras o que se encontra intimamente ligado ao acesso à água. Água para cozinhar, beber, cultivar e dar de beber aos animais - Isso é urgente frente à tendência de reconcentração que se impõe. Segundo, enfrentar a questão do mercado de terras fortemente aquecido com as novas possibilidades de uso da terra como ativo financeiro, o que tem aumentado o interesse por novas frentes de expansão. Nesse sentido, é preciso pensar como compreender e frear a financeirização da agricultura, da terra e da natureza.

E terceiro, criar políticas territoriais para camponesxs e povos e comunidades tradicionais que captem as necessidades e transformações acontecidas nos últimos anos. Os modelos institucionais para a criação, reconhecimento ou demarcação de assentamentos, terras indígenas ou quilombos⁷ estão ultrapassados por uma realidade complexa que, por um lado, incorpora novas demandas desses grupos, e, por outro, enfrenta novas formas de pressão do agronegócio e de grilagem legal, financeira ou virtual.

O contexto atual não é livre de contradições. Recentemente foi noticiada a reorganização do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) com a revogação do Decreto 9.806/2019 do governo de Bolsonaro pelo Decreto 11.417/2023. Na nova configuração, as ONGs ambientalistas que representam a sociedade civil passam a ocupar não mais que 20,4% dos assentos votantes do conselho. Como se vê, este Decreto não só deixou de ampliar, como, a rigor, fez diluir o espaço da sociedade civil no Conama. Dessa perspectiva histórica, não é difícil visualizar a falácia embutida no discurso do “retorno da ampla participação social”. Ao se relegar um peso tão diminuto à sociedade civil, o Conama permanece no lugar em que sempre esteve – e muito distante do ideal do “parlamento ambiental” que enganosamente se convencionou celebrar. Este novo Decreto insistiu em violar o arcabouço normativo que indica que deve reger a representação da participação popular em conselhos de políticas públicas, em especial os de meio ambiente (Lima, 2023).

Outra diretriz do governo é buscar um lugar de referência internacional no enfrentamento às mudanças climáticas e parte dessa perspectiva se materializa no apoio do governo aos mega-empreendimentos de energias renováveis, especialmente complexos industriais eólicos e/ou fotovoltaicos (como o recém inaugurado, complexo de energia eólica e solar

7 No caso dos outros povos e comunidades tradicionais, que com reconhecimento no Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais somam mais de 25, ainda a luta está no reconhecimento territorial e não só identitário. São necessárias novas políticas para efetivar a proteção de seus territórios sempre sob ameaça.

em Santa Luzia-PB). Se bem esta pode ser considerada uma ação em favor da desaceleração das mudanças climáticas, diversas comunidades do campo, das águas e das florestas têm feito denúncias porque são justamente nos seus territórios onde são instalados estes empreendimentos, causando conflitos de uso e apropriação e degradação à saúde humana e ao ambiente⁸.

Podemos considerar que se não houver pressão social nas ruas para serem garantidos os direitos territoriais, alimentares e aqueles direitos que desde a institucionalidade estão em disputa no contexto da frente ampla, as possibilidades de efetivar esses direitos serão mínimas. O próprio governo, especialmente pelo fato de ser formado por uma ampla aliança, tem ressaltado a importância dos movimentos sociais se mobilizarem para garantir que as suas demandas sejam respondidas. Evidencia-se cada vez mais a necessidade de construir e consolidar processos autônomos que nos permitam disputar um projeto soberano em que a vida esteja em primeiro lugar. Para tanto será preciso disputar as bases nas quais se assenta o papel do país, bem como dos demais países da região, na divisão internacional do trabalho.

BIBLIOGRAFIA

- Lima, José Leonidas Belém de. (13 de março de 2023). A 'reforma' do Conama: da promessa à frustração: Participação social no conselho, nunca tendo sido propriamente 'ampla,' continua não podendo ser assim qualificada. *JOTA*. Disponível em <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-reforma-do-conama-da-promessa-a-frustracao-17032023#:~:text=Ainda%20em%202%20de%20janeiro,Ambiente%20e%20Mudanca%20do%20Clima>.

⁸ Para conhecer mais sobre os impactos às comunidades, é possível assistir o documentário “Vento Agreste” realizado pela Comissão Pastoral da Terra, Residência em Saúde Coletiva e Agroecologia da UPE e do Instituto Mãe Terra. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pYEDygsfheE&ab_channel=VentoAgreste.

Mitidiero Junior, Marco Antônio; Moizés, Brenna da Conceição e Martins, Lucas Araújo. (2022) When Crimes becomes law. *Criminalological Encounters*. Bruxelas.

Rede PENSSAN (2022) *II Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil* [livro eletrônico]: Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar – PENSSAN. -- São Paulo, SP: Fundação Friedrich Ebert: Rede PENSSAN

Roos, Djoni; Soares, Gustavo Steinmetz; Montenegro, Jorge; Solá Pérez, Mercedes e Ferreira, Sirley (2022) Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica . *Informe 2021 - Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica*. Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Bautista Durán, Ruth, coord. / Coordinación y edición general: Ruth Bautista Durán; Oscar Bazoberry Chali; Lorenzo Soliz Tito. Edición en portugués: Vívian Braga.—La Paz: Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica





Informe Ecuador

Stalin Herrera*

Alejandra Santillana Ortiz**

Esteban Daza Cevallos***

Francisco Hidalgo****

Carlos Pastor*****

La complejidad del momento indígena-campesino en el Ecuador¹

El objetivo de este documento es pensar la coyuntura que vive el país, reconociendo una de las principales intenciones del Grupo de Trabajo de Estudios Críticos del Desarrollo Rural: pensar la sociedad desde los mundos rurales y las sociedades campesinas. En el caso del Ecuador, es

* Sociólogo, Master en Estudios Latinoamericanos, cursa el Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Integrante del Grupo Tierra e integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos al desarrollo rural.

** Socióloga. Directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos e investigadora del Observatorio del Cambio Rural; docente en la Universidad Andina Simón Bolívar. Integra los Grupos de Trabajo CLACSO Estudios críticos del desarrollo rural y Red de género, feminismos y memoria en América Latina y el Caribe.

*** Sociólogo, Master en Filosofía y Pensamiento Social. Coordinador del Observatorio del Cambio Rural. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos al desarrollo rural.

**** Sociólogo, Profesor de Sociología Agraria en la Universidad Central del Ecuador. Investigador asociado del CETRI. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos al desarrollo rural.

***** Politólogo, Especialista Superior en Cambio Climático, Magister en Relaciones Internacionales, Doctorando (PhD) en Estudios Latinoamericanos. Actualmente es rector del Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social, Popular y Solidaria. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos al desarrollo rural.

¹ El presente artículo fue enviado en el mes de junio de 2023 y aprobado agosto 2023.

especialmente interesante por la presencia del poderoso movimiento indígena que marca el ritmo de la historia reciente. Movimiento que, además de su fortaleza organizativa, fuerte presencia territorial y una intensa participación electoral con una relativa estabilidad en el control de gobiernos seccionales, ha impulsado varias propuestas para el cambio de la sociedad que están recogidas en la Constitución del 2008 (el Estado Plurinacional, la soberanía alimentaria, los derechos de la Naturaleza, la economía comunitaria, la prelación del agua, la restricción de uso de transgénicos, entre otros), las cuales constituyen importantes ejes de la disputa del campo frente a la expansión de los agronegocios y el sistema agroalimentario de mercado.

Sin embargo, a pesar de las conquistas constitucionales del 2008, no hay avances importantes en materia de políticas públicas, normativas o propuestas que garanticen los logros constitucionales alcanzados; las posibilidades de reproducción de la agricultura familiar indígena campesina enfrenta enormes límites, sus condiciones se deterioran como resultado del modelo hegemónico para el agro, la crisis económica y los efectos de la pandemia. Y es que los distintos gobiernos, sean progresistas o neoliberales, han mantenido una alianza férrea con el modelo primario agroexportador y los intereses de las elites -muchas de origen terrateniente.

A pesar de esto y de los muchos límites organizativos, podríamos decir que asistimos a un *tiempo marcado por lo indígena campesino* que es el resultado de una renovada presencia del movimiento indígena, sobre todo con las movilizaciones de octubre del 2019 y junio del 2022 que determinan las tensiones y límites del horizonte gubernamental.

Para entenderlo vamos a organizar el análisis de coyuntura de manera muy clásica: pensar las tensiones que el contexto global nos impone; observar el proyecto neoliberal del gobierno de Lasso; y situar la acción de los movimientos sociales.

Tensiones que el contexto global

En el contexto global hay varios fenómenos económicos y políticos que podrían marcar el ritmo de las disputas en el Ecuador.

Un primer elemento que llama la atención es la guerra entre Ucrania y Rusia, la cual parecería subordinarse al conflicto entre Estados Unidos y China, que tiene además otras dimensiones geopolíticas.

Por un lado, en una economía dolarizada como la ecuatoriana, en los últimos años el sector agrícola se ha visto golpeado por el incremento de los precios de los insumos, la producción y las exportaciones. Esto ha significado que el mercado interno se vea ocupado por productos de países vecinos que pueden manejar la inflación a través de la moneda nacional. Al interior del país, este contexto ha provocado una creciente presión de las elites para reducir costos a través de la liberalización de mercado y la ampliación de las exportaciones; y desde las organizaciones campesinas, una creciente demanda de control de precios y de protección interna a través de precios de sustentación -especialmente por parte de los pequeños productores de leche, arroz, maíz, cacao y banano que se han movilizado intensamente durante los últimos años.

Por otro lado, la disputa entre China y Estados Unidos, aunque en apariencia no nos vincula de manera directa, hace visible la creciente demanda de las elites por una mayor integración económica con los mercados globales. En ese escenario, si bien los Estados Unidos y Europa históricamente han sido los nichos de nuestras exportaciones, desde hace algunos años, en especial desde el gobierno de Rafael Correa, el mercado chino ha crecido en importancia para el país. El reciente Tratado de Libre Comercio con China² pone a Ecuador y a la agricultura en el eje de la disputa (crecientes demandas de productos en especial el camarón, pescado

2 Según el ministerio de la producción y Comercio Exterior, la entrada en vigencia de este acuerdo comercial permitirá obtener acceso preferencial para el 99% de las exportaciones actuales de Ecuador a China, destacándose principalmente productos agrícolas (camarón, banano, rosas

procesado, pitahaya, minerales y otros). China no solo se ha convertido en el mayor socio comercial, (hoy exportamos más a China que a Estados Unidos y Europa). y las inversiones chinas en el Ecuador tienen enormes efectos sobre el territorio y peso en los conflictos socioambientales contra la explotación minera y la construcción de megaproyectos en las tres últimas décadas.

Pero, si bien China ha ganado espacio en la economía nacional, Ecuador ha sido históricamente parte del “patio trasero” de los Estados Unidos y comparte con éste otras redes e intereses. El país se ha integrado a las iniciativas de control militar para la región, y con el actual gobierno encabezado por el presidente Lasso se ha planteado la necesidad de impulsar un Plan Ecuador para el control del narcotráfico (reeditando el nefasto Plan Colombia) y su reciente aprobación del uso de armas parece ser parte de las recomendaciones de la embajada norteamericana, a esto se suman las varias colaboraciones entre Estados Unidos y Ecuador por el tema de seguridad, por ejemplo el último anuncio de entrenamiento de policías ecuatorianos a cargo del FBI; y finalmente, las redes de narcotráfico presentes en el Ecuador están asociadas a la demanda de consumo en los Estados Unidos y, en menor escala a Europa.

El proyecto neoliberal del gobierno

A diferencia de los años anteriores en que la disputa política en el campo estuvo ordenada por el progresismo de la Revolución Ciudadana (2007-2017), en especial la expansión del Estado a través del ejercicio “gubernamental” de las inversiones sociales que legitiman la expansión del extractivismo y que contuvo la acción de los movimientos sociales; la actual coyuntura en el Ecuador está marcada, por el avance de un proyecto neoliberal y conservador comandado por Guillermo Lasso, banquero y

y flores, cacao, café, pitahaya, piña, mango, arándanos, quinua, alimentos procesados, frutas frescas y en conserva).

miembro del OPUS DEI, que impulsa una mayor integración al mercado global, “más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador”.

Al igual que en el resto de la región, es evidente el crecimiento de los agronegocios y la agroindustria en el país, con ella el fortalecimiento del complejo empresarial agroindustrial y financiero; grupos económicos y elites de origen terrateniente que controla distintas esferas de la economía y que tienen potentes intereses en el campo, presionan y ocupan el Estado para impulsar reformas normativas o negocios que aseguren la reproducción y ampliación de su ganancia.

Una dinámica que se vuelve visible y clara en la configuración de los gabinetes ministeriales, en las misiones y negociaciones comerciales que hoy impulsan una carta de inversiones (minería, agroindustria, privatizaciones a la carta, etc.) y el impulso de nuevos Tratados de Libre Comercio (México, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China, Israel, Canadá, Panamá, República Dominicana, Costa Rica), además del tratado con la Unión Europea ya firmado en el 2017, el cual podría marcar el inicio de este *segundo momento de desregulación neoliberal*.

El problema es que este impulso por la creciente integración económica del país, tiene efectos peligrosos para las comunidades indígenas campesinas, probablemente, el más visible sea la expansión material de las fronteras extractivas sobre los territorios (agroindustria, minería y petróleo), con esto la intensificación de la conflictividad territorial y la violencia. Un fenómeno visible, persistente y que hoy es parte central en la agenda del movimiento, es el tema minero y sus efectos sobre los territorios y el agua³.

3 Sobre la conflictividad social hay mucha información, pero sobre los casos relacionados con modelos extractivos pueden buscarse en los informes de tierra y territorios (2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022) promovidos por el IPDRS en <https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros>

Sin embargo, el proyecto de las elites y la expansión de la agroindustria/agronegocios se acompañan de una creciente *desregulación, flexibilización, desinstitucionalización y ajuste normativo*. Una reforma legal que tiene como objeto ajustar el Estado a las demandas del mercado (TLC) y con esto: la reprimarización de la economía, la flexibilización laboral, la flexibilización ambiental, la desregulación de mercados y la privatización del Estado. Un cóctel explosivo, especialmente nocivo para la vida y la reproducción de las economías campesinas en el Ecuador, que se ve reflejado en el incremento de la pobreza y la desigualdad; incremento en las brechas entre el campo y la ciudad; y las brechas entre mujeres y hombres, entre indígenas campesinos y no indígenas. Además, el encarecimiento de los alimentos y la canasta básica, lo cual agrava los problemas de hambre, acceso a alimentos y desnutrición en sectores populares.

Los límites del proyecto gubernamental

Las miradas sobre el gobierno son contradictorias, sobre todo, porque la legitimidad y popularidad del presidente Lasso han descendido sistemáticamente hasta llegar al 12%, porque carece de una bancada importante en la Asamblea Nacional y ha roto su margen de articulaciones posibles (primero con el correísmo, luego con el Partido Social Cristiano, su alianza con una parte del Pachakutik, y finalmente las mesas de negociación con las organizaciones tras el paro de 2022); pero al mismo tiempo, es un gobierno que ha podido sortear la presión social y política más grande del historia en el país: la movilización de junio del 2022. Así, en medio de la incapacidad política para garantizar un orden de consensos, se presenta como uno de los gobiernos “más fuertes de la historia”, aunque su capital político y su popularidad están por el suelo.

Hay quien atribuye su fortaleza a la alianza de poder que lo sostiene (la embajada, las élites financieras, los medios de comunicación, la policía y las Fuerzas Armadas); sin embargo, también es importante reconocer, qué esa fortaleza viene de la debilidad del resto de actores, sobre todo

de la dificultad de las organizaciones sociales y políticas de la tendencia de las izquierdas, para construir una articulación a largo plazo, tanto en la Asamblea Nacional, como en la oposición (electoral, pública) y en las calles.

Ahora hay que recordar que en medio de las elecciones seccionales del 2021, el gobierno apostó por impulsar una consulta popular con la intención de recuperar su legitimidad e impulsar su agresiva propuesta neoliberal. La estrategia se basó en un relato profundamente conservador en torno a la inseguridad y una lectura parcializada de ciertas encuestadoras a fines al gobierno, que daban durante semanas, un escenario donde ganaba el Sí en las ocho preguntas propuestas por el presidente Lasso. Así, el gobierno intentó usar la creciente violencia y el miedo de la población para levantar su campaña; esto implicó que no pudiera mirar la existencia de una enorme cantidad de indecisos que definieron sus opciones en los últimos días, incluso frente a la papeleta y, aunque las organizaciones no parecían tener capacidad de acción, el “no” ganó en todas las preguntas. Tampoco los asesores del gobierno recogieron el comportamiento repetitivo del pueblo ecuatoriano que asocia las consultas populares impulsadas por varios presidentes, con la gestión de los mandatarios. Lasso pensó que podía ganar a pesar del rechazo generalizado popular. El resultado de la Consulta también tuvo que ver la campaña y las iniciativas de articulación en torno del No, que, si bien era una estrategia, tardía y poco orgánica entre actores del campo popular, fundamentalmente jóvenes, feministas, y ecologistas, logró romper el cerco mediático oficial y posicionar la asociación entre la Consulta y el rechazo al gobierno. A esto se sumaron las posiciones públicas y declaraciones de las organizaciones frente a la consulta popular; una reflexión que transita en la *red de los sedimentos organizativos*.

Los resultados seccionales y la consulta barrieron con el gobierno que no solo perdió la Consulta Popular, sino que fue derrotado en las principales ciudades. Pero el hecho va más allá del mismo gobierno, la pérdida del Partido Social Cristiano en Guayaquil, uno de los partidos conservadores

y eje de la representación de las fuerzas más conservadoras del país que llevaba el control por cerca de 30 años de la ciudad portuaria más importante del país (Guayaquil), marca una fractura de las lealtades de los sectores populares con el proyecto de las elites. Podemos argumentar y cuestionar los resultados, podemos decir que el nuevo alcalde en Guayaquil es más o menos lo mismo, o es otra cabeza de la misma derecha, pero simbólicamente es importante reconocer que las figuras emblemáticas de la derecha oligárquica y conservadora (Jaime Nebot y Cynthia Viteri) perdieron. El fenómeno no era nuevo, en ambos paros 2019 y 2022, pudimos ver un resquebrajamiento de las lealtades y fidelidades de la población con el socialcristianismo; además pudimos ver la participación de otros sectores populares y organizados que reclaman para así una condición política y organizativa articulada al movimiento indígena; también vimos, a sectores empresariales amenazar al gobierno de articularse al movimiento indígena para lograr sus objetivos, una defensa mínima (inversiones) de sus actividades económicas.

Con esto quisiéramos resaltar un hecho importante. La debilidad del gobierno se traduce en una crisis política que es resultado del ejercicio mediocre/inoperante del Estado, pero al mismo tiempo se convierte en una apuesta neoliberal eficiente, el gobierno ha logrado impulsar algunas de sus apuestas más conservadoras. Sobre el hecho la popularidad del gobierno descende y las organizaciones impulsan su destitución, intentan capitalizar el descontento de la sociedad, pero el gobierno es más fuerte de lo que parece, no hay seguridad de que logren su destitución (no están garantizados todos los votos para el juicio político). Al mismo tiempo, la crisis política tiene cola y afecta al proyecto más amplio de las elites y se proyecta como una *crisis orgánica*, que abre un campo de disputa para las organizaciones sociales y sus expresiones políticas.

El momento indígena campesino

Más allá de las posiciones y fuerzas que se derivan de los resultados electorales, otro de los elementos que caracteriza el momento es la renovación o reposicionamiento del movimiento indígena campesino como eje articulador de la protesta. Pero sus efectos van más allá de las calles. Las movilizaciones del 2019 tuvieron como consecuencia que se impulse desde varias organizaciones y movimientos políticos el voto nulo en algunos cantones que llegó a vencer a los candidatos del momento (Arauz y Lasso); así mismo levantaron la candidatura de Yaku Pérez -candidato del movimiento indígena y representante del ecologismo antiminero en el país-, que por unos pocos puntos disputó el segundo lugar; Leónidas Iza, una de las figuras importantes de las movilizaciones del 2019, quien se convirtió en el mejor candidato para ser presidente de la CONAIE; el Pachakutik logró una bancada histórica en la Asamblea (27 asambleístas) y se configuró como la segunda fuerza política. Además, tanto las movilizaciones del 2019 como las movilizaciones del 2022 hicieron que la reforma neoliberal sea más difícil y costosa para los grupos de poder y el propio gobierno; que el proyecto de liberalización del precio de la gasolina y los combustibles sea más difícil políticamente. Las movilizaciones del 2022, posicionaron al movimiento indígena como el eje de articulación y de representación; empujaron la figura de Leonidas Iza a escala nacional; obligando al gobierno de Lasso a discutir 10 puntos de una agenda no neoliberal; y sin duda limó la poca popularidad de gobierno y coadyuvó a que pierda en las elecciones seccionales y la consulta popular (febrero 2023).

Es, desde nuestro punto de vista, esta recuperación de la capacidad de impugnación del movimiento indígena, los movimientos sociales y las movilizaciones marcaría el *momento indígena campesino*; que, si bien contrasta con la capacidad del gobierno para sortear la presión social y avanzar en su proyecto neoliberal, no es menos importante si consideramos que, durante el gobierno progresista, el movimiento vivía una

clara crisis y dificultad para lograr convocar a sus bases e interpelar la sociedad.

En el último paro, la CONAIE, junto a la FENOCIN y FEINE, logró ser el centro de la convocatoria, mantener la organización y dirección del proceso de movilización, luego la representación y diálogo con el gobierno, se presentó, así como el *hegemón* del campo popular. Sin embargo, su articulación va más allá de su condición indígena, en el proceso es visible la acción inorgánica de las organizaciones campesinas de la Costa, la enorme presión del movimiento antiminero, la colaboración incesante de los grupos ecologistas, los feminismos y lxs jóvenes. Así, el movimiento indígena vuelve a ser un espacio de articulaciones para otras organizaciones y movimientos, y su fortalecimiento puede convertirse en una oportunidad para el reverdecimiento del campo popular en su conjunto. Aunque, la movilización también mostró que hay tensiones entre el movimiento y sus formas de representación política (el PK); así como con el movimiento y las organizaciones de trabajadores (Frente Unitario de Trabajadores, FUT) y otros actores de izquierda.

A diferencia del 2019, el movimiento indígena instaló una agenda de 10 puntos que se oponen visiblemente a la agenda neoliberal y dialogan con las demandas de la sociedad, entre ellas; el control de precio de los combustibles, la lucha contra la expansión de la minería, la demanda por inversión social, la contención de las privatizaciones y el respeto de los derechos colectivos.

Para el campo, el *punto 3* abrió un fuerte debate sobre el futuro de la agricultura y en la mesa de diálogo repuso una agenda que dialoga con los campesinos “de hoy” (No a los tratados de libre comercio, condonación de deuda, crédito flexible, insumos, Plan Nacional de Agricultura Familiar Campesina con enfoque agroecológico, control de regalías en las flores, precios referenciales para los productos de la Agricultura Familiar Campesina, control de precios para los productos de consumo básico e importaciones de alimentos, capacitación con enfoque agroecológico,

entre otros), pero que no recoge las viejas demandas de la lucha por la tierra y las recientes acciones planteadas por las organizaciones campesinas⁴ -mostrando así la desarticulación entre las organizaciones campesinas, especialmente asentadas en la Costa, y el movimiento indígena.

En cierta forma la composición de las demandas relacionadas con el campo (el punto 3), mostraron la relación entre las transformaciones en el campo y la agenda campesina. El pliego de demandas dialoga con nuevos sujetos del campo: campesinxs fuertemente integrados al mercado y la agroindustria, de ahí la importancia del precio, los insumos, el crédito, la condonación de deudas, los precios de sustentación, la contención de las regalías, etc. Lo rescatable del momento fue la impronta agroecológica (precios justos, circuitos cortos, transiciones, bio-insumos, formación en agroecología, entre otros) que, también recrea la importancia del movimiento agroecológico del momento.

Sin embargo, al igual que siempre, el gobierno logró evadir las demandas de las organizaciones, el diálogo se produjo con un gobierno con poca voluntad de realizar cambios, sobre una mesa que brinda casi ninguna garantía para asimilar las demandas más radicales del movimiento. Históricamente las mesas de negociación han servido para desgastar a las organizaciones, desactivar la presión de su base y a la larga moderar las demandas de las organizaciones en la negociación, así legitimar a los gobiernos frente a la sociedad. Pero ¿cuáles hubieran podido ser las otras salidas a la movilización? Lo ideal es sostener la movilización indefinidamente hasta que el gobierno firme vía decretos sus compromisos, el Ministerio de Finanzas comprometa los recursos y los ministerios lo plasmen en un plan de ejecución, pero eso tiene un costo enorme para las fuerzas que sostienen las calles. La prolongación del paro y la falta de

- 4 En estos años recientes, las organizaciones campesinas venían peleando por varios temas que son de vital importancia para la AFC: la reforma a la ley de tierras para impulsar el Fondo Nacional de Tierras; el Código Orgánico de la Ley de Soberanía Alimentaria; una crítica a los sistemas de control que margina la producción campesina; precio y mercado para el banano / maíz / leche; derechos laborales; derechos campesinos, entre otras.

abastecimientos para las poblaciones reduce con el pasar de los días, la solidaridad de la población con la acción política de las organizaciones. La misma falta de resultados en la movilización termina desmoralizando a la propia base organizada. Negarse al diálogo, en regímenes democráticos que, más allá de si estamos o no de acuerdo con ellos, también se sostienen sobre imaginarios democráticos fuertemente arraigados en la población, puede implicar un costo político para el movimiento y su dirección.

El cálculo frente a la oferta del diálogo, siempre es un ejercicio complejo y aceptarlo cambia el escenario político; los tiempos de la movilización y la presión social chocan con la inmovilidad legal e institucional. Las mesas de diálogo se convierten en esferas públicas en las cuales los movimientos sociales deben hacer enormes esfuerzos, no solo para romper con la falta de voluntad política del gobierno, sino para disputar los relatos, combatir el reduccionismo técnico, la resistencia burocrática y la complicidad de los poderes conservadores (medios de comunicación, “expertos”, las universidades, entre otros), no hablemos del racismo estructural. Es un momento que exige del movimiento una acción política informada, la articulación de fuerzas que no solo puedan mantenerse en el tiempo, sino que abran los límites que la “racionalidad burocrática” le imprime y en ese campo hay muchas debilidades.

Los dirigentes campesinos no pueden permanecer indefinidamente en los diálogos, necesitan de recursos para viajar y sostenerse en la ciudad; necesitan de equipos técnicos que estén bien informados para pelear el uso tramposo de la información y que a la par conozcan de políticas públicas, manejo presupuestal y estructura del Estado; disponer de ejercicios que puedan hacer de su experiencia local o territorial una propuesta nacional; la sistematización y el impulso de propuestas detalladas sobre el funcionamiento de sus propuestas -desde cómo puede funcionar una norma para el funcionamiento de un sistema de precios referenciales para la AFC, a detallar los fondos, tiempos, normas y acciones con los que debería componerse un Plan Plurinacional para el Impulso de la

Agricultura Familiar Campesina durante los próximos 10 años-. Otro de los límites de las mesas también estuvo marcado por los límites de la movilización, el movimiento indígena no logró una articulación amplia para la representación y diálogo. Aunque pudieran disponer de intelectuales para sostener las mesas, eso no es suficiente, faltaron los trabajadores para hablar sobre el trabajo y presionar en las calles, y así, los maestros para disputar la política pública sobre educación; las mujeres y el movimiento transfeminista para hablar sobre sus derechos; y otros.

Pero, a sabiendas que las mesas son una “trampa de corbata”, es un escenario de disputa simbólica donde el movimiento debe demostrar que, más allá de la efímera movilización, su demanda es legítima, tiene una racionalidad institucional posible y su propuesta tienen la potencialidad de resolver la vida de las familias; y el balance, al menos en el punto 3, es ambiguo. El gobierno resolvió unas concesiones menores (urea e insumos, condonación de deudas, crédito) sus demandas más importantes no se lograron y tampoco lograron hacerse públicas. En la mesa logró acumular la experiencia, impulsar una agenda y compromisos gubernamentales con los cuales legitimar su acción política y fortalecer el *asedio*.

En la actualidad, el gobierno no supo aprovechar el momento y la mesas que el movimiento le tendió como oportunidad para recuperar su popularidad, frente a la falta de voluntad política y la insistencia del gobierno en expandir la minería, las organizaciones decidieron romper los diálogos y volver a la oposición en las calles, en un contexto en el cual el conjunto de fuerzas sociales demandan la salida del presidente.

La violencia como nuevo escenario para las luchas populares

Como elemento novedoso de la actual coyuntura, en Ecuador hay una explosión y expansión de la violencia ligada a economías ilegales y el narcotráfico. Una parte de las respuestas que intenta explicar esta escalada

de la violencia está asociada al grado de desinstitucionalización al que ha llegado el Ecuador resultado del dogmatismo neoliberal del gobierno, lo cual explica la falta de institucionalidad y capacidad del Estado para responder al problema y controlar la actuación de estas asociaciones criminales. Pero el proceso es más complejo: primero porque es evidente que son economías ilegales que no pueden funcionar sin la complicidad del Estado, tanto su funcionamiento territorial (explotación minera), como para su formalización en el sistema financiero (lavado de activos); segundo, son economías que están sostenidas por formas de organización mafiosas que impregnan al estado y al gobierno (el mismo presidente tiene acusaciones sobre el uso de paraísos fiscales para evadir impuestos; allegados cercanos tienen vínculos con la mafia albanesa; la embajada norteamericana ha denunciado sin nombres la presencia de narco-generales; la policía ha estado inmersa en varias denuncias que muestran sus vínculos o participación con bandas criminales); y son redes que usan la infraestructura formal y legal que está bajo el control del sector privado y el gobierno (pistas de aterrizaje y avionetas que usan las bananeras en la costa; puertos, aeropuertos y aduanas; y una franja costera que está controlada o al menos ocupada por las camaroneras).

El problema de esto es que son economías ilegales en el seno de un modelo primario exportador, con lo cual, tanto la explotación minera como las redes de narcotráfico son economías que se expande a costa y de la vida de comunidades indígenas y campesinas. El grado de anuencia, silencio y falta de acción gubernamental deja que el conflicto se resuelva en la ley del más fuerte.

Pero, las armas así como los Tratados de Libre Comercio, se enlazan con un problema para las organizaciones: el proyecto de las élites para la sociedad en el Ecuador. En este caso es importante resaltar que la presión por la mayor inserción de la economía nacional en el mercado global, nos muestra que las elites no tienen un proyecto de país. La ampliación del mercado exige una creciente flexibilización institucional, la reducción

del Estado y, sobre todo, la eliminación de la inversión pública en salud, educación o seguridad, ejes vitales para los sectores populares.

La visible apropiación del Estado o el Estado como garante de la reproducción de las ganancias de las elites, muestra que el grupo dirigente, no está dispuesto a sostener un pacto societal. Esta es una posición compleja, porque el gobierno débil y unas élites golpeadas, sin capacidad de mantener cierta hegemonía bajo consensos, deriva hacia una salida autoritaria.

En tal sentido, es difícil entender cuál es el rol que cumple la violencia ligada a las economías ilegales. Si bien, la violencia legitima el rol activo de las fuerzas armadas, el reforzamiento de la policía y la ampliación de proyectos que fortalece un estado securitista; el gobierno promueve e intenta legitimar la libre circulación de armas trasladando la seguridad a las propias familias, sitúa a las empresas privadas en la gestión de la seguridad y se alinea con los intereses de la embajada norteamericana (las armas como un negocio y la cooperación internacional el marco de la contención del narcotráfico vía Plan Ecuador), marcando así, un problema nuevo, la privatización de la seguridad -tema que no es menor y que ha terminado por promover fuerzas paramilitares en la región.

A la larga, el gobierno parece apostar por una salida autoritaria en la cual, la violencia, legitima la decisión de persuadir la presión social vía mayor represión, judicialización y criminalización; y abrir, un campo de acción para la extensión de intereses ilegales (narcotráfico, trata de personas) y privados (minería, agroindustria, megaproyectos) a través del uso privado de las armas. En ambos casos, son los y las defensoras de derechos los actores más vulnerables.

Conclusiones

Finalmente, el movimiento indígena y las organizaciones campesinas, aunque pueden crear un espacio de articulación en el cual participan otros

movimientos y organizaciones, no disponen de la suficiente fuerza en las calles para lograr los máximos de sus demandas. Esto se combina con una estrategia desde el gobierno y los grupos de poder, mucho más agresiva y represiva que en años anteriores, y la ausencia de las Fuerzas Armadas como actor dirimente en momentos de crisis de gobernabilidad, institucionalidad, etc. De ahí que el diálogo o las mesas de negociación hayan sido históricamente un recurso para salir del paro. Sin embargo, las movilizaciones y las mesas abren oportunidades a mediano y corto plazo, cambian los escenarios y parte de las fuerzas e intereses que actúan. Un primer elemento es el posible juicio político al presidente y el peso moral que tienen las movilizaciones sobre sus representantes. Además, en el corto plazo, es visible la reacción de los gobiernos en el incremento del gasto en la agricultura, la necesidad de una agenda agraria a favor de la agricultura familiar campesina, la Asamblea Nacional ha ratificado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en el campo; y en el mediano plazo, las movilizaciones han abierto un enorme debate sobre las próximas elecciones en las que Leónidas Iza aparece entre las encuestas, aunque al mismo tiempo, su brazo político flaquea, las pugnas personalistas crecen, negocia y no logra aprovechar el capital moral que heredó de las calles.

El futuro político está abierto, sabemos que el movimiento indígena por sí solo no es suficiente y las calles son el momento álgido de nuestras aspiraciones, pero es un momento fugaz. De cara al actual gobierno y su proyecto, incluso con su salida a través del juicio político, no cambiaría sustancialmente la ruta trazada por los intereses de las élites. El tiempo político cambia y las elecciones nacionales se aproximan, abriendo un nuevo escenario en donde la Revolución Ciudadana se proyecta con fuerza, pero sin un debate crítico sobre su responsabilidad en la crisis, la crítica que guarda en su seno un anti correísmo feroz presente en varios sectores de izquierda (especialmente en los ecologismo antimineros y extractivistas) y el rol de los movimientos indígenas campesinos del último periodo: en voz de su máximo líder, el movimiento indígena no es una alternativa política para el país, es una organización tomada por

dirigentes corruptos y, si bien reconoce el valor de Leónidas Iza, acusa permanentemente al movimiento de haber vendido la movilización del 2019 y permitido que Moreno permanezca en el poder; una visión que además es muy común en la Izquierda Latinoamericana.

El momento demanda de las organizaciones una política de alianzas más clara y decidida, pensando en los plazos largos. La figura del Leónidas podría incrementar las tensiones al interior del PK, pero también tiene la popularidad para recoger una articulación más amplia con las izquierdas (sobre todo ahora que el nuevo coordinador de PK es el ex alcalde de Cayambe y ex candidato a la prefectura de Pichincha, Guillermo Churuchumbi), pero es una promesa recurrente e históricamente frágil, no es posible solo con su imagen, necesita construir el programa, invitar a los actores, levantar una propuesta para la sociedad de conjunto, mostrar la viabilidad de su propuesta y producir la alternativa política. Si algo hay que aprender de los progresismos es que una propuesta de izquierda no está vetada de la posibilidad electoral, el Estado tiene una autonomía relativa de las élites, la sociedad explora en los relatos que le ofrecen una alternativa concreta frente a la crisis.

BIBLIOGRAFÍA

Buschschluter, Vanessa (4 noviembre 2021). “Es hora de un Plan Ecuador”: el presidente Lasso dice en entrevista con la BBC que su país necesita ayuda para enfrentar el narcotráfico, en BBC News. <https://n9.cl/fk5m2>

CEDES (2018). “Los impactos de los capitales chinos en el Ecuador”, en Centro de Derechos Económicos y sociales <https://n9.cl/nzqts>

Córdova Luis (6 abril 2023) “Sin la ley aprobada por la Asamblea, no habría este decreto de porte de armas”. <https://n9.cl/hlmmr>

El Expreso (7 de agosto 2022). “China se convirtió en el mayor socio de Ecuador en productos no petroleros. <https://n9.cl/g6csj2>

El Universo (19 enero 2022). “Guillermo Lasso ratifica los diez países con los que

Ecuador busca firmar acuerdos comerciales en los próximos tres años”, <https://n9.cl/it6dgj>

Gonzales, Mario (11 junio 2022). “Lasso pide a Estados Unidos un Plan Ecuador para combatir el narcotráfico”, <https://n9.cl/qlna0>

Herrera, Stalin (2022). “El complejo empresarial agroindustrial y financiero: un nuevo escenario para las luchas campesinas”, Boletín Territorio y libertad, Año 2 – Número #3 Soberanía y autonomía alimentaria. PARTE II 2022. Buenos Aires – CLACSO. <https://n9.cl/3hivk>

Infovaticana (1 julio 2021). “El presidente de Ecuador, del Opus Dei, celebra el ‘Orgullo gay’”. <https://n9.cl/v7zoh>

Montaño, Doménica (3 octubre 2022). “¿Qué es la consulta popular?”, en revista GK. <https://gk.city/2022/08/17/que-es-la-consulta-popular/>

Primicias (24 febrero 2023). “La Conaie rompe el diálogo y pide la renuncia del Presidente”, Primicias. <https://n9.cl/opzyf>

Primicias (30 marzo 2023). “La relación de Rubén Cherres con el narcotráfico tendría unos 24 años, en <https://n9.cl/o9n57>

Pastor, Martín (2018). “Base de Manta 2.0: la renovada presencia militar de EE.UU. en Ecuador”, <https://n9.cl/g67vg>

Singaña, David (2022). “Ecuador: nuestra agricultura dependiente, en Observatorio de Cambio Rural, <https://n9.cl/l2rx7>

////////////////////////////////////



Informe Guatemala

Mario Sosa*

Algunos elementos de su coyuntura¹

El 25 de junio Guatemala registrará una elección más después de la vuelta a la democracia burguesa y tutelada, que acontece con la aprobación de la actual Constitución de la República y con la elección en 1985 de un gobierno civil. Sin duda, esa vuelta a la institucionalidad implicó cambios importantes después de décadas en las cuales predominó la represión contra toda forma de protesta social, principal forma de dominio que incluyó, como expresión máxima, una política de genocidio en especial contra comunidades campesinas y pueblos indígenas. El arrasamiento de comunidades completas fue la manera definitiva que el Estado diseñó y ejecutó para lograr la derrota de la insurgencia revolucionaria que emergió posterior a la invasión estadounidense, al derrocamiento de Jacobo Árbenz Guzmán en 1954 y a la instauración de un régimen anticomunista que dejó como cauda, entre otras, 42,275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños, de las cuales 23,671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6,159 a víctimas de desaparición forzada, así como más de un millón de personas desplazadas, de las cuales 150 mil buscaron refugio en México (CEH, 1999).

* Antropólogo social. Investigador y profesor en la Universidad Rafael Landívar y en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesor y coordinador del Área de Antropología, en la Escuela de Historia de la Universidad Estatal. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Estudios Críticos al Desarrollo Rural

¹ El presente artículo fue enviado en el mes de junio de 2023 y aprobado agosto 2023.

Lo que en su momento fue pensado como el inicio de una transición a la democracia -idea que se afianzó después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996-, que daría paso a la inclusión de las demandas y propuestas de los sujetos históricamente excluidos, pronto se reveló como una transición, sí, pero a un régimen neoliberal. Las políticas de ajuste estructural que se implementaron desde los años 80, con la vuelta a la democracia liberal y la firma de la paz, se vieron fortalecidas con la privatización acelerada de empresas estatales, la disminución del acceso a la educación y salud públicas, la emisión de leyes que disminuyeron obstáculos e impuestos al capital local y transnacional, la supeditación del país a las disposiciones externas, tal como sucedió con el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, República Dominicana y Estados Unidos (firmado en 2001) que, además, en su aplicación se convirtió en norma supraconstitucional de obligado cumplimiento. Y, como venía sucediendo, la exclusión en las políticas públicas de los problemas que enfrentaban los históricamente marginados: el campesinado, los pueblos indígenas, los obreros, las mujeres, entre otros; esto no obstante algunos ensayos devenidos de los acuerdos de paz que, más temprano que tarde, experimentaron su inoperancia e incumplimiento.

En este marco, a inicios del siglo XXI se empieza a experimentar una expansión e intensificación de varias dinámicas de acumulación de capital: proyectos mineros, hidroeléctricos, de infraestructura vial, expansión de monocultivos como la palma aceitera, caña de azúcar, el crecimiento de la producción y tráfico de drogas, con lo cual se ven afectadas las tierras y territorios de pueblos indígenas y mestizos que han sido objeto de despojo, desplazamiento, violencia y represión. Esa expansión capitalista ocurre en el contexto de un modelo de acumulación de capital basado en una estructura agraria profundamente desigual, con un índice de Gini del 0.84 en el acceso a la tierra, orientado a la producción de materias primas para la exportación y la provisión al “mercado internacional” de fuerza de trabajo, energías, minerales, metales y alimentos baratos, con una industria y un sector de servicios exiguos.

Sigue observándose la consolidación de un modelo basado en el monocultivo, al extractivismo, que se traduce en mayor acaparamiento de tierras y territorios, deterioro de las condiciones ambientales, que supedita orientaciones productivas estratégicas en perspectiva endógena y, como una de sus implicaciones, también la necesidad de garantizar soberanía alimentaria. Un modelo que logra incorporar, por la vía del salario y el contrato laboral, solo al 29.2% de la población económicamente activa según los últimos datos oficiales para el 2021, de los cuales la mayoría apenas devenga el salario mínimo que para el 2023 se encuentra entre 386 y 408 dólares, el cual es deficitario en 62 dólares para cubrir la canasta básica alimentaria y en mil 86 dólares para cubrir la canasta básica ampliada. La carencia de empleo, acceso a medios de producción, a crédito, etc. hacen parte de los factores que explican las condiciones de pobreza que alcanzan al 60% de la población² y que esto sea la razón de los masivos flujos de migrantes hacia el norte del continente, principalmente hacia Estados Unidos. Un modelo que, además, se mantendría en estancamiento permanente si no fuera por el ingreso de remesas enviadas por los migrantes, las cuales representaron para el 2022 la cantidad de 18 mil millones de dólares; de hecho, para el 2021 el ingreso de remesas representó el equivalente al 17.8% del Producto Interno Bruto del país, por encima de los ingresos de divisas procedentes de las exportaciones.

Del bloque de poder en el Estado

En concordancia, el Estado guatemalteco fue objeto de supresión de sus facultades para normar en buena medida la economía, fue disminuido en su capacidad de prestar servicios esenciales y controlar estratégicamente los recursos nacionales. Sucesivos gobiernos de derecha, aún con sus matices, se han dedicado a facilitar las principales vertientes de

- ² Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, sitúan la pobreza para 2015 en 59.3 % y extrema pobreza de 23.4 %. Con el impacto por la pandemia por Covid-19, la pobreza aumentó en 3% según el Banco Mundial (2022). Según la FAO, 3 millones 200 mil personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda para mayo de 2023 (Prensa Libre, pág. 4, 30/05/23)

acumulación de capital imperantes, aplicando medidas de distinto orden: desregulación laboral, exenciones fiscales, despojo de tierras y territorios y medidas de control y represión social a cargo del ejército nacional y de la Policía Nacional Civil que, en contubernio con grupos de protección privados en cada empresa, agro negocio y proyecto extractivo, han accionado contra las distintas formas de resistencia y lucha que los confrontan.

Tales gobiernos, en especial desde 2012 a la fecha, han representado la confluencia y articulación de grupos corporativos locales, expresiones del capital transnacional, redes de militares de alta y en retiro y expresiones del narcotráfico, quienes han coincidido en dos objetivos fundamentales: mantenerse en la impunidad y garantizarse cuotas procedentes de las principales dinámicas de acumulación de capital y de saqueo de los recursos públicos.

En 2015, las investigaciones emprendidas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)³, permitieron descubrir la existencia de redes de crimen organizado que controlaban los principales organismos del Estado al más alto nivel. Esto llevó a la detención del entonces Presidente de la República para el periodo 2012-2016, Otto Pérez Molina, y la Vicepresidenta, Roxana Baldetti, entre otras decenas de funcionarios públicos, políticos, militares y empresarios que resultaron involucrados en actos de corrupción referidos a concesiones de obras públicas, evasión de impuestos, financiamiento electoral ilícito, compra de jueces, facilitación de condiciones para el trasiego de drogas, entre otros crímenes. Se logró determinar la existencia de por lo menos un partido político (el partido Lider) con altas posibilidades de ganar la elección de ese año, encabezado por el empresario Manuel Valdizón, vinculado a un

³ La CICIG fue solicitada a la Organización de Naciones Unidas por el Gobierno de Guatemala para colaborar en la erradicación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que operan en este país. Inició su instalación en el país en 2007. Para más información al respecto, véase: <https://www.cicig.org/history//index.php>

cartel “mexicano” de narcotráfico y juzgado posteriormente en Estados Unidos.

Esto generó que los grupos afectados gestaran rápidamente y en el contexto electoral una salida no solo a la crisis política que generó tales denuncias y detenciones, sino también a la búsqueda de salir bien librados de sus prácticas corruptas y criminales descubiertas. Prontamente encontraron en el *outsider*, Jimmy Morales y el partido político de un grupo de militares de viejo cuño contrainsurgente, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), la opción no solo para ganar las elecciones sino para iniciar un proceso de expulsión de la CICIG y detener los procesos de investigación y enjuiciamiento en marcha. La CICIG es expulsada de Guatemala en 2019 y con la imposición de una nueva Fiscal General de la República, proclive a estas elites, se inició un proceso de obstaculización, detención y reversión de los procesos de investigación y enjuiciamiento, así como la persecución de fiscales y jueces que intervinieron desde la CICIG, el Ministerio Público y juzgados correspondientes en los juicios por crímenes de lesa humanidad contra militares y en los juicios contra estas estructuras criminales. Hoy, en un periodo gubernamental de continuidad, encabezado por Alejandro Giammattei, muchos de esos fiscales y jueces están en el exilio o detenidos a partir del control casi absoluto que dichas estructuras lograron en el ámbito de lo judicial y lo constitucional.

Con los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024) han sido constantes las denuncias por casos de corrupción que los involucran directamente. Más allá, han sido dos gobiernos que, a partir de alianzas partidarias, han controlado los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, y lograron finalmente el control de la Corte de Constitucionalidad y un conjunto de instituciones estratégicas, tales como la Secretaría de Administración Tributaria, la Contraloría General de la Nación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Procurador de Derechos Humanos y el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala, además de contar con el contubernio de los principales medios de comunicación masiva. Con esto, hoy tienen un control absoluto del

Estado, de tal manera que siguen avanzando en su política de garantizarse impunidad e inmovilizar a todo actor que los hubiese perseguido o que los adverse. Esto se expresa en la criminalización, persecución y detención de jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos, o su exilio; impedimentos para la participación de candidaturas alternativas, como la de Thelma Cabrera, líder indígena y campesina, candidata por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Se pretende algo que algunos de los operadores de este bloque de poder han definido como “matar civilmente” a sus detractores a través de impedirles continuar ejerciendo sus labores o luchas en el ámbito jurídico, político o periodístico.

Esto hace, entonces, que estemos ante un bloque de poder que ha negociado las ventajas del manejo de las políticas públicas, las concesiones de obra pública y los flujos del saqueo de los recursos estatales. Así mismo, que ha sido facilitador de la continuidad y profundización del modelo de acumulación de capital, incluidas la aplicación de medidas de represión contra las resistencias sociales a los proyectos extractivos. Desde 2012, las expresiones políticas y liderazgos que representan dicho bloque, han hecho desaparecer las posibilidades de gestión de políticas y pretensión de aprobación de leyes más o menos progresistas y de beneficio para los campesinos y los pueblos indígenas.

Por ejemplo, la Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral (LSDRI, Iniciativa de Decreto 40-84), abanderada por el movimiento campesino desde 2009, fue desechada por el Congreso de la República debido a que implicaba ciertos límites a determinadas dinámicas de acumulación de capital en el campo e instituía una política en apoyo a la agricultura familiar y la economía campesina (véase Sosa, 2017). Las pretensiones de reforma constitucional para el reconocimiento del pluralismo jurídico, orientado a la vigencia plena de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y a la necesaria coordinación con el sistema jurídico estatal, fue impedida por el bloque de poder, en cuyo caso fue sobresaliente la oposición de las representaciones políticas de la oligarquía criolla,

históricamente dominante, con lo cual la instancia de coordinación de las autoridades ancestrales indígenas a nivel nacional sufrieron un duro revés en sus objetivos. En el caso de las luchas de las mujeres y los grupos de la diversidad sexual, estas se vieron aún más amenazadas por el intento de la alianza oficialista en el Congreso de la República, la cual pretendió a inicios de 2022 aprobar una ley con la cual se buscaba normar un determinado tipo de familia (de inspiración cristiana conservadora) y se prohibía y penalizaba explícitamente el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que por cierto no constituye un derecho reconocido. El 22 de marzo de 2023, el Congreso de la República aprobó reformas al Código Penal y al decreto 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada, en las cuales se aumenta las multas y la pena de cárcel en contra de quienes “roben energía eléctrica”, figura política con la cual se ha venido criminalizando la huelga de pago de energía eléctrica organizada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), ante los abusos de cobros exorbitantes de *Energuate*, empresa de distribución de energía eléctrica propiedad del fondo de inversión estadounidense *I Squared Capital*.

Las tendencias en el proceso electoral 2023

Se arriba a estas elecciones generales en una correlación de fuerzas favorable para los intereses representados por el bloque de poder ya descrito y adversas para las luchas sociales de orientación democrática y progresista. Como ha sido usual en los últimos lustros, el bloque de poder dominante continúa coincidiendo en sus objetivos ya mencionados. No obstante, siendo que es un bloque no homogéneo, sus diferencias y disputas internas encuentran en el proceso electoral un momento que las evidencia y que se expresan en diversos partidos y candidaturas. Así, la contienda electoral ha sido un momento para que cada élite se reposicione a partir de la cuota de diputaciones y alcaldías municipales logradas en la primera vuelta eleccionaria y a partir de insertarse en el balotaje, lo cual

logran a partir de financiar varias opciones electorales y asegurarse estar en las negociaciones de cara a la segunda vuelta electoral presidencial.

Todo lo anterior también es posible en la medida que han diseñado y mantenido un sistema multipartidario dominado por corrientes, intereses y propietarios provenientes de los principales grupos corporativos, empresas transnacionales, grupos de militares, políticos rentistas y, como una novedad no tan reciente, de estructuras del narcotráfico. Es decir, un sistema con predominio de partidos de derecha, en la cual sobresalen cada vez más corrientes con signos fascistas que, no sin tiras y empujas, terminan sometiéndose a los designios de la política de Estados Unidos. Así mismo, de un manejo de la contienda a partir del control de los medios de comunicación masiva, el financiamiento lícito e ilícito de las campañas y del supuesto “fiel de la balanza”: el Tribunal Supremo Electoral. El TSE, electo por las elites que integran el bloque de poder dominante, viene realizando decisiones cuestionadas en su carácter legal y político, constituyéndose en uno de los principales factores de desconfianza para el órganos y para el proceso electoral que, además, presenta un conjunto de signos sobre su carácter fraudulento: financiamiento electoral ilícito de campañas, uso fraudulento de recursos públicos, participación de estructuras del narcotráfico, veto a candidaturas alternativas, profunda inequidad en el acceso pagado a los medios de comunicación masiva, entre otros. En este contexto, las fuerzas de izquierda y progresistas han venido participando en condiciones de desventaja y sin la capacidad de competir y, por consiguiente, de gestar una hegemonía alternativa que permita pensar en un cambio en la correlación de fuerzas y en un curso distinto al Estado.⁴

Según diversas encuestas, los partidos políticos y coaliciones con mayores posibilidades para obtener una mayor cantidad escaños para el Congreso de la República serían: Valor-Unionista, encabezada por Zury Ríos,

⁴ Con relación al sistema de partidos políticos en Guatemala, puede consultarse, entre otros, Ramos y Sosa (2011)

hija del dictador Efraín Ríos Montt –condenado por genocidio en 2013– y acuerpada por ex funcionarios acusados de corrupción y grupos de ex militares contrainsurgentes; Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuya abanderada es Sandra Torres, ex primera dama en el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), cada vez más rechazada, entregada a intereses empresariales y que integra el bloque de poder dominante, quien ganó la primera vuelta electoral en 2019 y perdió en el balotaje; Cabal, cuyo candidato es Edmundo Mulet, tercer lugar en las elecciones de hace cuatro años, devenido de la extrema derecha, con un discurso moderado, quien fuera funcionario de la ONU y acusado de facilitar adopciones ilegales de niños. Estos son los partidos con mayores posibilidades de insertar su candidatura presidencial en una segunda vuelta que se realizará el 20 de agosto y en torno a los cuales se vinculan grupos pertenecientes a las élites que hoy confluyen y se articulan en el bloque de poder que controla el Estado. A estos habrá que agregar al partido Vamos (el partido de gobierno), encabezado por Manuel Conde, ex diputado tráfuga que ha transitado por diversos partidos de derecha, quien siendo la candidatura oficialista carga con el desgaste de la gestión gubernamental actual y cuyo resultado confirmaría la norma para el caso de Guatemala: ningún partido político ha logrado repetir en la presidencia desde la vuelta a la institucionalidad en 1986. Estas son las fuerzas partidarias principales que integran lo que se conoce popularmente como Pacto de Corruptos.

Un elemento de incertidumbre sobre el resultado electoral que obtendrán finalmente los anteriores partidos políticos, está constituido por la orientación final del creciente voto que había logrado acumular la candidatura de Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana, quien fue expulsado de la contienda por irregularidades en la realización de sus asambleas partidarias. Partido y candidato de orientación conservadora y de vínculos sospechosos con una de las estructuras del narcotráfico que opera en el país, quien en una de las últimas encuestas estaba con posibilidades de insertarse al balotaje. La orientación que Pineda realice de este voto dependerá de las negociaciones que pudiera hacer con alguna

de las opciones anteriores o con la capacidad de estas para adherir a los simpatizantes del candidato.

Secundariamente, partidos políticos progresistas y de izquierda que pueden ser ubicados como parte de la oposición política en este momento, podrían agenciarse de una cantidad menor de diputados. En específico, el partido progresista Semilla propone la candidatura presidencial de Bernardo Arévalo, un diplomático, sociólogo y actual diputado, quien compite por primera vez al cargo; VOS, un partido organizado producto de una escisión de UNE, cuyo candidato es Manuel Villacorta, también sociólogo quien logró el 5% de los votos en las elecciones de 2019, encabezando en ese entonces al partido Movimiento Político Winaq, de centroizquierda. Tanto Semilla como VOS, son partidos proclives a reformas de corte liberal, orientadas a garantizar la separación de poderes del Estado, disminuir el poder de las elites oligárquicas, el crimen organizado y las redes de corrupción, pero se alejan de propuestas de cambio importantes al modelo económico y de propuestas como el Estado plurinacional que abanderan las más importantes organizaciones indígenas y campesinas.

Con menos posibilidades aparecen los partidos de la centroizquierda o izquierda electoral: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Movimiento Político Winaq, que en coalición presentan como candidato presidencial al ex diputado indígena Amílcar Pop, abogado, ex diputado al Congreso de la República y actualmente diputado en el Parlamento Centroamericano. No obstante, esta coalición es limitada, siendo que en la mayoría de distritos compiten de forma separada por las candidaturas a diputaciones y alcaldías. Sus propuestas pueden ser ubicadas en la socialdemocracia y aunque coinciden en la defensa de los intereses de los sectores populares y pueblos indígenas, buscan alejarse de la propuesta de Estado Plurinacional, la cual observan como parte de las banderas principales de su contendiente en el espectro de la izquierda: el MLP, y como un anticuerpo para ser situado en la plataforma de campaña electoral.

Por su lado, el MLP es el instrumento político del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), una de las organizaciones campesinas más importantes en el país, la cual ha desplegado una huelga de pago del servicio de energía eléctrica y una lucha por su nacionalización, además de proponer el camino de una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional para fundar el Estado Plurinacional. En esa búsqueda organizó este partido con el propósito de lograr la mayor cantidad de diputaciones que le permitan convocar a dicho espacio constituyente. Sin embargo, en la elección anterior sólo logró una diputación al Congreso de la República, no obstante que, con su candidata presidencial Thelma Cabrera, alcanzó el cuarto lugar con el 10.37% de los votos válidos. Este año participará por segunda vez, pero sin candidatura presidencial, siendo que la misma fue vetada con argumentos espurios por el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, con lo cual muy probablemente obtenga una muy escasa representación en el parlamento. El MLP asumía que con su candidatura presidencial tendría la posibilidad, inclusive, de insertarse en la segunda vuelta electoral y, entonces, disputar ese cargo.

En general, la izquierda viene siendo oposición al bloque de poder que controla el Estado, pero en una condición de marginalidad y escasa incidencia, característica que se expresa en lo electoral en tanto asiste a las elecciones nuevamente de forma fragmentada y sin los recursos de poder para competir por las primeras posiciones, siendo su debilidad organizativa, su escasa financiación y su marginación de los medios de comunicación masiva. Muy probablemente seguirá siendo una opción supeditada, sin capacidad de ubicarse en la parte central de la disputa política en los próximos años.⁵

A pesar de lo anterior, es destacable la presencia de organizaciones y liderazgos importantes devenidos del movimiento campesino e indígena

- 5 Al respecto de la izquierda electoral, puede consultarse Sosa (2015), en donde aparecen un conjunto de factores en buena medida vigentes en el proceso electoral actual, que han incidido desde inicios de los años 2000 y que hacen que se mantenga en la marginalidad política

en particular que se han aliado con partidos de izquierda y progresistas. En la coalición URNG-Winaq, aparece Daniel Pascual en una segunda casilla del listado nacional para competir por diputaciones. Pascual, de origen k'iche', es el dirigente desde la década del 90 del Comité de Unidad Campesina (CUC), organización que nace aliada del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en 1978. El CUC es la principal dinamizadora de la Asamblea Social y Popular (ASP), que ha realizado planteamientos en la idea del Estado Plurinacional, aunque sin materializar una propuesta propia y sin darle prioridad en su agenda política situada a través de la figura de Pascual. En el partido VOS aparece la figura de Leocadio Juracán, de origen Kaqchikel, dirigente del Comité Campesino del Altiplano, una organización que se ha expandido territorialmente y que anteriormente fue aliada del CUC en la ASP; Juracán llegó a ser diputado nacional por el partido Convergencia, de orientación socialdemócrata, en el periodo 2016-2020. Caso especial es el de Codeca, organización que rompe políticamente con la URNG en 2015 y de cuyo partido político, el MLP, ha referido anteriormente.

El carácter y curso del proceso electoral, en términos generales, ubica al país en una disyuntiva. Continúa la tendencia devenida del avance de los intereses y políticas implementadas por el bloque de poder dominante, que algunos analistas han empezado a denominar Dictadura Corporativa Criminal. Esta es una tendencia de rompimiento legalizado del orden constitucional, en donde estructuras criminales y corruptas controlan y deciden el curso de las instituciones, políticas y emisión de leyes, profundizan las medidas que facilitan las dinámicas de acumulación de capital imperantes y consolidan la política de persecución a toda oposición que los confronta en el ámbito de la justicia, la política y en el campo de la implementación de los proyectos extractivos. La alternativa estaría en detener, hasta cierto punto posible, este proceso de deterioro de las condiciones sociales, económicas y políticas que devenga de un resultado electoral favorable a las fuerzas progresistas y de izquierda, lo cual es muy poco probable que suceda siendo que el escenario político, tendencialmente, dará como resultado la consolidación del bloque de poder

que controla el Estado y, por consiguiente, el afianzamiento de decisiones y acciones que presentan signos de corte fascista, en especial en la criminalización y represión en contra de quienes luchan para oponerse al despojo de bienes comunes e intentan reconstruir el proyecto político alternativo a partir de la propuesta de un nuevo Estado de carácter Plurinacional, Popular y Multisectorial.

Del sujeto político en esta coyuntura

En este marco, están dadas circunstancias cada vez menos favorables para las luchas de resistencia que expresan el enfrentamiento al capital, al Estado, al sistema de opresión y racismo y al sistema patriarcal. Es acá donde situamos la emergencia de sujetos colectivos con nuevas posibilidades históricas. Por ejemplo, el campesinado, que ha emprendido luchas de importancia histórica, como la Marcha por el Agua en 2016 y el enfrentamiento a la expansión de monocultivos que producen desplazamiento de comunidades, afectaciones ambientales y deterioro de las condiciones laborales. Los pueblos indígenas, quienes, desde su asiento histórico-territorial, vienen confrontando los proyectos mineros e hidroeléctricos y encabezan la defensa de sus tierras y territorios a través de la realización de consultas comunitarias, de movilizaciones masivas en algunas regiones del país, en donde emergen desde sus sistemas jurídico-normativos y sus formas de organización, autoridad y representación política.

Sin restar importancia a otros sujetos colectivos, las luchas que se despliegan en el país desde inicios del siglo XXI, que son las principales manifestaciones de confrontación al capitalismo extractivista, permiten situar al campesinado y pueblos indígenas como las formas de acción política más importantes que se funden unas con otras. Así, las estrategias y búsquedas de los pueblos mayas y xinca han estado simbióticamente relacionadas y desarrolladas también en las luchas del movimiento campesino que, en tanto mayoritariamente indígena en su integración, desde los

años noventa viene gestándose como parte, al mismo tiempo, de las luchas de los pueblos indígenas. En ese sentido, el movimiento campesino ha sido nodal en la resistencia a la expansión de los proyectos extractivos que incluyen, además, la expansión de monocultivos de caña de azúcar, palma aceitera, banano, hule, entre otros. Ha sido importante también en el desarrollo de alianzas sociopolíticas, de movilizaciones nacionales y, en conjunto con otros sujetos como las organizaciones feministas y de mujeres, en la formulación de avances programáticos que articulan propuestas de buen vivir y cuidado de la vida como alternativas al modelo económico y las políticas del capital que son las políticas del Estado. A través de sus diversas expresiones, tales como el CUC, CCDA y Codeca, en conjunto con otras articulaciones como la ASP, el Consejo del Pueblos Maya (CPO) y la Coordinación y Convergencia Maya Waqib' Kej, proponen e impulsan el proyecto de Estado plurinacional para Guatemala, el cual, no obstante, todavía no ha sido situado en el centro de la disputa política nacional, en parte por la desarticulación de la cual ya se ha hecho referencia y que se expresa justamente en el momento electoral actual.⁶

Más allá de las expresiones, dispersiones y rezagos programáticos que se sitúan en las expresiones progresistas y de izquierda, será importante continuar el estudio en perspectiva de sujeto político, lo que permite trascender la perspectiva de corta duración, los enfoques institucionalistas y circunscritos a lo electoral y, desde ahí, reflexionar sobre el curso que debiera seguir la búsqueda de gestar condiciones para la transformación social desde este rincón de la Patria Grande, Nuestra América.

⁶ En torno al sujeto político que pretende el Estado plurinacional en Guatemala, véase Sosa (2022).

BIBLIOGRAFÍA

- Banco Mundial. (2022). *Macro poverty outlook: Guatemala*. The World Bank Group. <https://pubdocs.worldbank.org/en/719811582655263649/mpogtm.pdf>
- Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999). *Guatemala, memoria del silencio, vol. I: Mandato y procedimiento de trabajo. Causas y orígenes del enfrentamiento armado interno*. Guatemala: UNOPS.
- Ramos, Belinda y Mario Sosa (2011). *Un Estado, otra Nación. Culturas políticas, ciudadanía e intermediación en Guatemala*. 2ª edición. Guatemala: URL, INGEP.
- Sosa Velásquez, Mario (2022) “Aproximación al sujeto político y la propuesta de Estado Plurinacional en Guatemala”. *Eutopía*, Núm. 8. https://biblioteca.url.edu.gt/revista_eutopia/cara-parens-revista-eutopia-no-8/
- ____ (2017). “Disputa por la política de desarrollo rural integral en Guatemala”. *Eutopía*, núm. 3. <http://recursosbiblio.url.edu.gt/CParens/Revista/Eutopia/Numeros/3/>
- ____ (2015) *De la incompetencia y los retos de la izquierda en Guatemala*. Centro de Medios Independiente. <https://cmiguate.org/de-la-incompetencia-y-los-retos-de-la-izquierda-en-guatemala/> y <https://cmiguate.org/de-la-incompetencia-y-los-retos-de-la-izquierda-ii/>
-



Boletín del Grupo de Trabajo
Estudios críticos del desarrollo rural

Número 4 · Junio 2023